

SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:  
CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES,  
GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO  
DE DESARROLLO  
**COLOMBIA**





Copyright © [2018] Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Esta es una publicación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vicepresidencia de Países.

**SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:  
CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES,  
GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO  
DE DESARROLLO  
COLOMBIA**

El 4% del PBI de América Latina y el Caribe proviene del sector extractivo, un porcentaje equivalente al generado por la agricultura en la región. Para impulsar crecimiento sostenible, es necesario un relacionamiento efectivo entre gobiernos, empresas y sociedad civil. En este diagnóstico de Colombia, el BID busca dar luz a las buenas prácticas entre actores del sector extractivo sobre acciones de información, diálogo, consultas, colaboración y alianzas que están generando desarrollo en el país. De los hallazgos del diagnóstico se ha generado además una hoja de ruta, para orientar a los actores en el fortalecimiento de su relacionamiento.

El presente cuadernillo se enfoca en los hallazgos de Colombia y forma parte del diagnóstico regional que fue realizado en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. La publicación completa está disponible en: <https://publications.iadb.org/es/sector-extractivo-y-sociedad-civil-cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es>

**Publicación elaborada gracias al Fondo Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF) financiado por el Gobierno de Canadá**

**Liderazgo, coordinación de equipos y contenidos**

Flavia Milano, Especialista Senior en Operaciones/Sociedad Civil, Vicepresidencia de Países, BID – Líder de Proyecto

**Revisión y ajuste de contenidos**

Martin Walter, Especialista de la Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID  
Maria Dolores Vallenilla Sosa, Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID

**Ediciones:**

Irene Irazábal Briceño, Vicepresidencia de Países, BID  
Viviane Espinoza, Vicepresidencia de Países, BID

**Coordinación e investigación general:**

Volker Frank (Fundación Futuro Latinoamericano)  
Javier Caravedo (ProDiálogo)  
Iván Ormachea (ProDiálogo)  
Mitzy Canessa (Grupo de Diálogo Latinoamericano)  
Bruno Gomes (Grupo de Diálogo Latinoamericano)

**Equipo de investigación por país**

María del Pilar Pardo Fajardo, Gestión Ambiental Estratégica - Investigadora y punto focal caso Colombia  
Martha Cecilia Osorio Bustamante, Gestión Ambiental Estratégica - Investigadora y punto focal caso Colombia

**Especial agradecimiento**

La líder de proyecto, el equipo de coordinación e investigadores país dan su especial agradecimiento y recordatorio a José Luis Lopez Follegatti, promotor del diálogo sobre minería y desarrollo sostenible en el Perú, quien en vida participó y jugó un rol importante para la conformación de este equipo y el desarrollo exitoso de esta investigación.

# Contenido\*

<b>1. INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO REGIONAL</b>	4
1.1. LOS TRES ACTORES INVOLUCRADOS CON LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	9
1.1.1. Empresas extractivas	9
1.1.2. Gobierno	11
1.1.3. Sociedad Civil	15
1.2. LOS COSTOS DE LOS CONFLICTOS	17
<b>2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL</b>	20
2.3. COLOMBIA	22
2.3.1. Cuadro de Resumen	22
2.3.2. Introducción	24
2.3.3. Buenas prácticas	25
2.3.4. Análisis de Actores	34
2.3.5. Marco Legal	36
<b>3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNÓSTICO REGIONAL</b>	39
3.1. CONCLUSIONES	40
<i>Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores</i>	40
<i>Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento</i>	40
<i>Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador</i>	41
<i>Sobre los principales actores</i>	41
<i>Sobre los temas abordados en las prácticas</i>	42
<i>Sobre el relacionamiento</i>	43
<i>Sobre las prácticas de relacionamiento</i>	44
3.2. RECOMENDACIONES	46
<i>Para las empresas</i>	46
<i>Para la Sociedad Civil</i>	47
<i>Para el Estado</i>	48
<i>Para los tres actores</i>	49
<b>4. HOJA DE RUTA</b>	50
HOJA DE RUTA DE COLOMBIA	52

\*La tabla de contenidos de este cuadernillo mantiene la numeración original del diagnóstico regional.

## Siglas y acrónimos

ACM	Asociación Colombiana de Minería
ACP	Asociación Colombiana de Petróleo
AIDSESP	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
AMEXHI	Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
AMSA	Antofagasta Minerals
AMUCEP	Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari
ANDI	Asociación de Industriales de Colombia
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ASF	Auditoría Superior de la Federación
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAEM	Cámara Argentina de Empresarios Mineros
CAMIPE	Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Inc.
CAR	Corporaciones Autónomas Regionales
CEAS	Comisión Episcopal de Acción Social
CEMDA	Centro Mexicano en Derecho Ambiental
CERFORMOMALI	Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc.
CFE	Consejo Federal de Energía
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económica
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
CITT	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica
CMAP	Comité de Monitoreo Ambiental Participativo
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre
COFEMA	Consejo Federal del Ambiente
COFEMIN	Consejo Federal de Minería
CONADI	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONALEP	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CONAP	Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
CORMIDOM	Corporación Minera Dominicana
CVSA	Cerro Vanguardia SA
DGM	Dirección General de Minería
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EITI	Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva
ENTRE	Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva
EVIS	Evaluación de Impacto Social
FALCONDO	Falconbridge Dominicana
FARN	Fundación Ambiente y Recursos Naturales
FFLA	Fundación Futuro Latinoamericano
FOMISAR	Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez
GDL	Grupo de Diálogo Latinoamericano Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible
GDMDS	Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible
GMN	Grupo Multipartícipe Nacional de EITI
ICMM	International Council on Mining and Metals
IED	Inversión Extranjera Directa
IMCO	Instituto Mexicano para la Competitividad
INFOTEP	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
LWR	Lutheran World Relief
MAC	Asociación Minera de Canadá
MBV	Mesa de Buenos Vecinos
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MIMARENA	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MSX	Minera San Xavier

OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSC	Organización de la Sociedad Civil
PACMA	Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
PAE	Panamerican Energy
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PGS	Plan de Gestión Social
PIB	Producto Interno Bruto
PUCP	Universidad Católica del Perú
PVDC	Pueblo Viejo Dominicana Corporation / Barrick Pueblo Viejo
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RSE	Responsabilidad Social Empresaria
SEMARNAT	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER	Secretaría de Energía
SMCV	Sociedad Minera Cerro Verde SAA
SNMPE	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
SODOGEO	Sociedad Dominicana de Geología.
SPH	Sociedad Peruana de Hidrocarburos
TSM	iniciativa “Hacia una minería sustentable”
UAGRO	Universidad Autónoma de Guerrero
UASD	Universidad Autónoma de Santo Domingo
UBA	Universidad de Buenos Aires
UNMSM	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
UNSAM	Universidad Nacional de San Martín
UTECO	Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales



# 1. INTRODUCCIÓN

Los países ricos en recursos naturales y la consiguiente actividad extractiva de esos recursos no renovables -minerales, petróleo y gas-, impulsan varias perspectivas de aproximación. El análisis económico permite estimar los costos de inversión, la rentabilidad de las empresas y los aportes con los que el sector extractivo contribuye a la economía de una nación o región. Desde un punto de vista de adelantos tecnológicos, las industrias extractivas requieren el empleo de sofisticadas tecnologías de punta con el potencial de contribuir a reducir impactos adversos. Desde lo ambiental, por la dimensión propia de este tipo de proyectos, se habla de los impactos de las actividades extractivas en la naturaleza y la biodiversidad, la competencia por el uso de recursos hídricos, las consecuencias en los cultivos y la posible contaminación de ríos o fuentes acuíferas y donde, las tecnologías mencionadas, pueden jugar un papel decisivo en las medidas de ahorro y mitigación.

**Desde la perspectiva social se requiere una sofisticación no menor para abarcar y analizar oportunidades y desafíos entre los actores involucrados, frente a las diferentes fases de los grandes proyectos, como la exploración, explotación y cierre, especialmente respecto a las comunidades aledañas<sup>1</sup>.**

El diagnóstico que se presenta a continuación se acerca al sector extractivo desde una perspectiva de relacionamiento entre los principales actores involucrados, el Gobierno, la Empresa y las Comunidades afectadas directa o indirectamente por la actividad extractiva. El diagnóstico se aleja de un enfoque clásico hacia las actividades extractivas como “de maldición de los recursos naturales” para investigar y poner en evidencia aquellos hallazgos donde el relacionamiento de actores efectivo representó una oportunidad de desarrollo.

El diagnóstico como línea inicial partió de información conocida basada en estudios previos y experiencia de campo, repasando que la actividad extractiva conlleva el involucramiento de esos tres actores en diferentes capacidades: (i) el **gobierno** y su rol a nivel nacional, provincial y/o municipal respecto a los pasos relacionados con la actividad extractiva como el diseño y asignación de pliegos de licitación, autorizaciones, monitoreo de implementación, con un lapso temporal de influencia de las decisiones políticas (en ausencia de instituciones que respalden dichas decisiones) más breve comparado con los otros dos actores, (ii) la **empresa** que por la naturaleza de la actividad extractiva a largo plazo permanece en el terreno por periodos en general comprendidos por decenios y que luego de





¿Cómo los gobiernos, las comunidades y las industrias pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?







obtenidas las autorizaciones y licencias (incluida la social), se emplaza geográficamente y pasa a formar parte de la vida de las comunidades aledañas a la zona de extracción. Esta particularidad no menor que define a la actividad extractiva, tiene una influencia en el tejido social y la economía local con impactos en la composición de los grupos tradicionales: (iii) las **comunidades**, además de ser responsables de dar información y comprender el alcance del proyecto para otorgar, la licencia social para operar permanecen en el terreno por generaciones y mantienen un relacionamiento en cada fase de la actividad (tratándose de extracciones “onshore”, desde la apertura al cierre de actividades). La actividad extractiva puede aportar oportunidades a las comunidades y también pueden conllevar nuevas tensiones al interno de la propia población. Entre estas oportunidades y tensiones estaría la empleabilidad de trabajadores provenientes de las comunidades. Por los requerimientos específicos y perfil técnico esta empleabilidad tiende a ser baja, generándose mayor competitividad por puestos de servicios. En ocasiones esta circunstancia puede abrir una brecha entre aquellos trabajadores provenientes de las comunidades versus miembros de la misma comunidad sin trabajo en la empresa. Las comunidades son susceptibles de fracturas internas donde no existían conflictos con anterioridad. Este factor también viene con el arribo de trabajadores fuera de la comunidad que generan un aumento significativo de la población local con nuevos habitantes en la zona y ajenos a las tradiciones y ritmos rurales. Esta circunstancia a su vez genera una natural presión sobre un mismo territorio y respecto a los mismos recursos. Nuevas construcciones de infraestructura y los tiempos

de obras que afectan la circulación al interno de las comunidades, son también otros de los conflictos registrados como así; posible aumento del consumo de alcohol; desbalance del número de hombres respecto a mujeres; potencial aumento de crímenes de género; inicio o aumento de actividades de prostitución. Mención aparte merece la capacidad de la empresa de influir en la cadena de valor con diferentes emprendimientos y organizaciones de servicios que pueden crecer en oportunidades de desarrollo por la llegada de la empresa y que también, en muchos casos, dejan a la empresa extractiva a merced de la fijación monopólica de los precios de esos servicios.

*¿Cómo las partes involucradas pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?*

Para responder a esa pregunta, el presente diagnóstico se enfocó en estudiar las buenas prácticas de relacionamiento, que han conseguido tanto resultados medibles y comparables susceptibles de ser replicados, como nuevos emprendimientos productivos o avances significativos como por ejemplo en sectores de educación y salud como también impactos intangibles como la generación de confianza y procesos de colaboración. El enfoque busca evidenciar lo que sí funciona en una actividad que representa para algunos de los países ricos en recursos naturales más del 50% de sus ingresos fiscales<sup>2</sup>. Las buenas prácticas que se reúnen en esta publicación dan pautas y orientaciones para consolidar y mejorar el relacionamiento entre los tres actores y muestran caminos innovadores, por los que el sector extractivo pueda aportar al desarrollo nacional y local en los países de América Latina y el Caribe.



**La actividad extractiva  
representa para  
algunos de los países  
ricos en recursos  
naturales más del 50%  
de sus ingresos fiscales.**

Las buenas prácticas muestran que un buen relacionamiento genera confianza, logra acuerdos sobre temas en disputa, fortalece la economía local, genera prácticas ambientalmente sostenibles y mejora la calidad de vida de la población. Las propias buenas prácticas también indican que el relacionamiento de actores es el resultado de procesos donde se requiere una visión de mediano y largo alcance, adherida a la asignación e inversión de recursos humanos y financieros.

Para este diagnóstico se seleccionaron países de la región ricos en recursos naturales con diferentes perfiles y experiencia en temas extractivos: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana.

Para la elaboración de este estudio se validaron las experiencias encontradas, triangulando las mismas con representantes de industria/empresa, comunidades/sociedad civil y gobiernos, para asegurar su acuerdo respecto a la experiencia considerada como buena práctica según criterios anteriormente definidos<sup>3</sup>. Ulteriormente, se realizó una segunda validación mediante diferentes fuentes de información como material escrito, entrevistas, visitas de campo y mesas de trabajo.

A fin de ordenar el universo de experiencias se agruparon metodológicamente los hallazgos en cinco niveles de relacionamiento<sup>4</sup>.



#### **Información:**

Este nivel comprende la entrega de datos y referencias sobre el proyecto extractivo por parte de la empresa y del gobierno. También, incluye la facilitación de información por parte de las organizaciones de la sociedad civil presentes sobre el territorio y los portadores de interés.



#### **Diálogo:**

El diálogo se refiere al intercambio activo, continuo e informal que a partir de diversos grados de contacto entre los actores en torno al sector extractivo busca crear o fortalecer relaciones constructivas entre las partes. Estos procesos pueden ser eventuales o sostenidos en el tiempo, con un potencial de cambio constructivo de las relaciones.



#### **Consulta pública<sup>5</sup>:**

La consulta se considera un proceso formal, público y organizado en etapas que responde a obligaciones legales o regulatorias, así como principios de mejores prácticas universales, con el objetivo de recibir insumos respecto a un proyecto extractivo.



#### **Colaboración**

Son las acciones en las que las comunidades, la empresa extractiva o gobierno elabora productos de conocimiento o en las que la misma comunidad participa en iniciativas de formación para agregar capital humano capacitado que beneficie el crecimiento económico local.



#### **Alianza**

Son las acciones en las que se incluyen y financian comunidades para que sean estas las encargadas de implementar un proyecto o componente proyecto en torno al proyecto extractivo.



# 1.1. Los tres actores involucrados con las actividades extractivas

## 1.1.1. Empresas extractivas

El término industria extractiva se refiere a todas las empresas – públicas o privadas – que tienen como objetivo extraer recursos naturales<sup>6</sup>. También incluye empresas prestadoras de servicios directamente relacionados con el proceso de extracción (por ejemplo, empresas que suministran torres de perforación). A su vez, excluye a todas las empresas relacionadas con la comercialización, sean estos los administradores de ductos, buques, gasolineras, etc. En el contexto de esta publicación técnica, no se incluye a la minería artesanal y de pequeña escala.

Las empresas extractivas operan en las zonas de periferia del mundo, cotizan en los mercados de valores internacionales, emplean tecnologías de punta, e interactúan localmente con los gobiernos y comunidades. A nivel mundial, las empresas extractivas asociadas en su mayoría en gremios globales, vienen impulsando un conjunto de iniciativas para fortalecer su relacionamiento con las comunidades locales. La industria minera cuenta con el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) que lidera el campo de la responsabilidad social en el sector<sup>7</sup>. Es una organización conformada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al desarrollo sustentable. ICMM, fundada en 2001, reúne a 23 de las empresas de minería y metales líderes en el mundo, así como 34 asociaciones regionales, nacionales y de *commodities*. Dichas empresas y asociaciones se comprometen a mejorar su rendimiento en el desarrollo sostenible y la producción responsable de los recursos de minerales y metales que se necesita a nivel social<sup>8</sup>.

Igualmente, la industria hidrocarburífera, cuenta con la "International Association of Oil & Gas Producers" fundada en 1999 como la voz de la industria líder global<sup>9</sup>. Los miembros de la asociación producen más de un tercio del petróleo y gas que consume el mundo. La asociación opera apoyando a los reguladores de la industria para mejorar la seguridad y el desempeño ambiental y social. Es también un espacio único donde los miembros de la asociación intercambian conocimientos y buenas prácticas para mejorar la salud, la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social<sup>10</sup>.



Para las industrias, la presencia de los gobiernos con regulaciones claras y el relacionamiento efectivo con la población local son elementos claves para la inclusión de los interesados en el mejor éxito de las operaciones. La experiencia ha enseñado que las empresas buscan un proceso continuo de relacionamiento con las comunidades locales, en miras a construir confianza y tener un apoyo de la mayoría de la población para el avance del proyecto extractivo. Existe una tendencia creciente por la que las empresas consideran a la población como un aliado potencial para la implementación del proyecto, y con la cual es necesario construir confianza, desarrollar vías de comunicación efectiva y acordar normas de un relacionamiento que implique resultados e impactos positivos para todos los actores involucrados<sup>11</sup>.

Gracias a los resultados del presente diagnóstico pudo constatararse que la mayoría de las empresas fomentan una interacción con las comunidades que va más allá de compartir informaciones o mantener diálogos informales y promueven y elaboran planes de relacionamiento que ayudan a minimizar el impacto negativo y aumentan las oportunidades económicas y sociales que se abren con el proyecto extractivo. En esta línea y fuera del nivel comunitario, la sociedad civil se ha constituido en una masa crítica que junto a empresas responsables han impulsado y adherido a principios voluntarios de derechos humanos y negocios<sup>12</sup>, cumpliendo a una misma vez con el respeto y promoción de otros derechos sociales y económicos<sup>13</sup>.

Se ha relevado también que existe un interés en promover a las empresas locales mediante su vinculación a la industria extractiva como proveedores de bienes y servicios. De esta manera se fomenta el fortalecimiento de la economía local, con el impulso del sector extractivo, constituyéndose en un interés compartido con el gobierno<sup>14</sup>.





En una misma línea, el diagnóstico ha arrojado evidencia, que las industrias, gestionan el relacionamiento con las comunidades y asignan recursos humanos y técnicos<sup>15</sup>. Por otro lado, las empresas que se dedican a actividades de exploración en la primera fase del proyecto extractivo suelen no tener los recursos económicos para desarrollar procesos de colaboración y alianzas por requerir de una planificación e inversión de recursos humanos y financieros más importantes, por lo que las acciones de información y diálogos iniciales son decisivas. En otro orden, algunos proyectos en fase de explotación no cuentan con recursos humanos y financieros preasignados para un relacionamiento empresa-comunidad eficiente. Algunas empresas al no contar con una planificación para su relacionamiento pueden fallar en comunicar las oportunidades y los límites de su accionar<sup>16</sup>.

Durante la implementación del proyecto, el gobierno –nacional y local- y la empresa se encuentran en una situación de colaboración necesaria y tienen roles complementarios en el relacionamiento con la comunidad. No obstante, no siempre los roles respectivos están claros y no en todos los casos existen las capacidades necesarias para cumplir con dichos roles<sup>17</sup>.

A lo largo del diagnóstico se ha comprobado que el relacionamiento en el sector extractivo se ha visto impulsado por avances importantes en el diseño y la implementación de principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Según el ICCM, las empresas han mejorado sus prácticas en aspectos como transparencia, derechos humanos y ambiente y buscan la forma de contribuir a un desarrollo sostenible a nivel país en los territorios donde operan<sup>18</sup>. Muchas empresas extractivas incluyen en su política de RSE programas de promoción de capacidades productivas, como también programas de salud, mejoramiento de infraestructura local y de educación formal<sup>19</sup>.

### 1.1.2. Gobierno

Los gobiernos nacionales de la región<sup>20</sup>, sin distinción en cuanto a su orientación partidaria, han implementado políticas para la captación de inversiones extranjeras directas para proyectos que incluyen a las industrias extractivas<sup>21</sup>. Los altos precios de las materias primas han aumentado los ingresos fiscales de los países en América Latina y el Caribe y han incrementado la inversión y la actividad económica. Algunos gobiernos en la región ahorraron una porción de los ingresos y otros usaron dichas ganancias para incrementar el gasto fiscal. Es por eso que la reducción de los precios a finales de 2008 y con más fuerza entre 2012 y 2013 ha impactado de manera diferente en el desarrollo de los países<sup>22</sup>.

El auge de los precios de las materias primas ha tenido sus impactos en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en la región<sup>23</sup>. El sector extractivo también ha tenido efectos positivos en el empleo; no obstante, en comparación con el total de la Población Económicamente Activa (PEA) los aportes son relativamente modestos. En los países seleccionados para el diagnóstico, el porcentaje del empleo del sector extractivo frente a la PEA es de alrededor el 1% con excepción de Chile donde supera el 2%<sup>24</sup>.

Los gobiernos buscan adaptar su marco institucional y legal para seguir captando ingresos a través del sector extractivo. La caída de los precios de los recursos mineros y petroleros a partir de 2013 ha llevado a los gobiernos nacionales a crear marcos normativos atractivos que aseguren la estabilidad económica y jurídica de las inversiones en el sector, lo que frecuentemente plantea dilemas para el equilibrio en su rol de regulador de las actividades extractivas y garante de los derechos humanos y recursos naturales<sup>25</sup>.



Los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas, han fortalecido sus sistemas democráticos e institucionales, han gestionado eficientemente la macroeconomía y han implementado políticas sociales incluyentes con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad. Aun así, el fin del boom de las materias primas ha develado problemas estructurales, en varios países de la región, referidos a asuntos fiscales e institucionales, así como a otros de tipo social, político y económico<sup>26</sup>.

Los gobiernos nacionales crean el marco normativo e institucional bajo el cual se desarrolla el relacionamiento entre empresa y población local. Especial atención merece la consulta a Pueblos Indígenas considerada en marcos legales mediante la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo<sup>27</sup>. Perú es el único país del estudio en el cual la consulta está reglamentada por una ley, mientras que en Chile, Colombia y México existen normas legales a nivel de decretos para este fin<sup>28</sup>.

En otro orden y respecto al nivel de acceso a información también se encontró que está fuertemente regulado. En todos los países existen normas legales que facilitan el acceso a información de manera general, y en las leyes ambientales se especifica el acceso a informaciones sobre el estado de la naturaleza. La elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, incorporan en muchos casos derechos importantes para la población local como el acceso a información, a la consulta y otras formas de relacionamiento de actores<sup>29</sup>.

Respecto al marco institucional del sector extractivo el gobierno nacional está conformado por diferentes ministerios que no necesariamente comparten las mismas prioridades, aunque su funcionamiento se rige por unos lineamientos generales de política pública. En todos los países del diagnóstico son los ministerios de minería y energía quienes diseñan las políticas para el sector extractivo y controlan el cumplimiento de los mismos<sup>30</sup>. Por otra parte, existen los ministerios que velan por el ambiente y son los encargados de la aprobación de la licencia ambiental. Según cada país, intervienen otros ministerios en el relacionamiento con la población local. Por ejemplo, en Chile es el Ministerio de Desarrollo Social quien a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena coordina la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las comunidades indígenas<sup>31</sup>. En cambio, el Ministerio de Interior de Colombia lidera la interlocución con las comunidades locales. En Perú, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad apareció como un ente de coordinación para el acercamiento entre los diversos actores, muy centrado en las industrias extractivas, aunque ha perdido su rol en los últimos años<sup>32</sup>.

Aparte del poder ejecutivo, en los países que fueron analizados en el diagnóstico existen otros actores estatales a nivel nacional que intervienen en el relacionamiento entre empresa, comunidad y Estado en el sector extractivo. La Defensoría de Pueblo actúa como garante de los Derechos Humanos y en algunos países como Perú también es un promotor importante de diálogos a nivel local. En México, es la empresa estatal PEMEX quien diseña las políticas de relacionamiento en el sector petrolero. La Corte Constitucional de Colombia, frente a la ausencia de una ley que regula la consulta previa,

ha contribuido a darle cuerpo a esta norma internacional<sup>33</sup>. En resumen, intervienen una serie de actores nacionales estatales en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Si bien este accionar cubre posibles vacíos regulatorios, esto también aumenta el riesgo de una falta de coordinación entre las diferentes instancias por un lado y entre estas y otros actores como empresas y comunidades por el otro<sup>34</sup>.

El diagnóstico también encontró que la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se vería beneficiada con un nivel más alto de coordinación y comunicación necesario para acordar estándares y condiciones para la implementación de proyectos extractivos<sup>35</sup>. Mientras que las competencias sobre el sector extractivo son centralizadas en el gobierno nacional, los gobiernos locales juegan un rol fundamental como representantes e interlocutores de la población local.

Las posibilidades de relacionamiento con los gobiernos locales dependen de sus perspectivas y políticas frente al sector extractivo. El diagnóstico muestra que, por ejemplo, en Argentina existen gobiernos provinciales con normativas favorables para el desarrollo del sector extractivo responsable mientras que otros siete gobiernos provinciales del mismo país han dictado leyes

que prohíben las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto o aquellas que usen sustancias químicas tales como el cianuro en sus procesos<sup>36</sup>. En Colombia, hasta mediados de 2017 los Concejos Municipales de cinco municipios colombianos han aprobado consultas populares en torno a proyectos extractivos, y en todas las consultas la población ha votado en contra de estos proyectos<sup>37</sup>.

Los gobiernos locales no solamente son interlocutores importantes en procesos de diálogo y colaboración, sino también juegan un rol central para que los recursos provenientes del sector extractivo sean invertidos de manera efectiva en obras que benefician a las comunidades aledañas al proyecto. Dependiendo del país, hasta 50% de los ingresos fiscales son distribuidos a los gobiernos locales, siendo Chile el país en el cual más se centralizan los ingresos y Colombia y Perú los países con mayor proporción de recursos descentralizados<sup>38</sup>. Una condición importante para que los recursos aporten al





desarrollo local es la capacidad de los gobiernos subnacionales para coordinar la inversión y efectuarla de manera eficiente. Los recursos constituyen una oportunidad para el desarrollo y una transformación de las dinámicas y economías locales, siempre y cuando en los territorios estén las capacidades instaladas para poder aprovechar esta oportunidad<sup>39</sup>.

El diagnóstico muestra que la coordinación entre gobiernos de diferentes niveles, industrias extractivas y sociedad civil aumenta las oportunidades para que los recursos provenientes del sector extractivo contribuyan a un desarrollo local<sup>40</sup>. Por ejemplo, en Argentina los tres sectores conformaron una la Agencia de Desarrollo a nivel local que contribuyó a que la economía local basada en la producción de lana, que atravesaba una fuerte crisis, se recuperara y generara alternativas productivas. La empresa minera que operaba en la zona impulsó la creación de la Agencia, participó activamente en ella, y financió algunos proyectos priorizados por la misma. Otro de los ejemplos es la Mesa de Buenos Vecinos que reúne a los tres actores en un municipio en Chile y orienta la inversión del sector extractivo hacia nuevas opciones económicas de desarrollo<sup>41</sup>.

Para los gobiernos locales, es de suma importancia que la inversión de los recursos se oriente a un plan de desarrollo del territorio y a un proceso de ordenamiento territorial, posibilitando de esta manera que los recursos sean destinados a las obras de mayor relevancia para los actores locales y respetando la planificación del gobierno local en lo que se refiere a sus posibilidades ambientales, económicas y sociales. Según esta perspectiva, el sector extractivo debería ser “un invitado en este proceso”<sup>42</sup>, que se suma y agrega valor a ese plan de desarrollo consensuado entre los grupos poblacionales y basado en la realidad del territorio.

En todos los niveles de gobierno, sobre todo en países con poca tradición extractiva, existe demanda para más capacitación y formación en temas relacionados con el sector. A nivel de los gobiernos locales se requiere la contratación de más técnicos especializados en estos temas. Un mayor conocimiento del sector extractivo facilitará una negociación más equitativa entre gobierno local y empresa extractiva y ayudará a consolidar y mejorar las prácticas de relacionamiento, lo que a su vez resultará en obtener más beneficios para la población local<sup>43</sup>.





### 1.1.3. Sociedad Civil

La sociedad civil está conformada por una amplia gama de organizaciones y grupos humanos sin fines de lucro que representan sectores e intereses sociales, culturales y étnicos. Su radio de acción puede estar tanto a nivel rural como urbano, local, regional o internacional. A nivel nacional, se encuentran fundaciones, grupos profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), academia, movimientos sociales, confederaciones de pueblos indígenas, iglesias, o fundaciones de las empresas extractivas que financian proyectos de desarrollo, y sindicatos. A nivel local, actúan comunidades, organizaciones comunitarias, asociaciones, grupos indígenas y grupos afrodescendientes. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pueden ser formales (debidamente registradas en sus respectivos países) o informales (agrupaciones no registradas oficialmente).

La heterogeneidad de la sociedad civil se refleja también en los diferentes roles que asumen sus organizaciones en el relacionamiento con los sectores privado y público en torno al sector extractivo. Los diagnósticos de todos los países seleccionados reportan una polarización de la sociedad entre opositores y partidarios en torno al sector extractivo. Pero también reportan una diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo que difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

**La diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.**

Por un lado, en los países analizados existen OSC que crean y fortalecen espacios de relacionamiento entre empresas, Estado y las mismas comunidades y facilitan la comunicación entre los tres actores a nivel nacional y local. Por otro lado, existen OSC que desde una perspectiva crítica buscan incidir en las políticas públicas y generan información para contribuir a que las actividades extractivas cumplan con los derechos de las comunidades y estándares ambientales y sociales. En tercer lugar, se encuentra una serie de OSC que se oponen a la actividad extractiva incondicionalmente y fomentan y acompañan acciones de resistencia de la población local.

El diagnóstico relevó que, en Argentina, Chile y México, las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en

torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos. Generalmente, las universidades gozan de legitimidad ya que son consideradas como instancias con alto grado de saber técnico por ende guiados por este y percibidos en un rol neutral. Un ejemplo es el Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (*Prodiálogo*) del Centro de Educación y Docencia Económicas (CIDE), una de las universidades con más prestigio en México que organiza foros y talleres multisectoriales para promover el diálogo en torno al sector extractivo<sup>44</sup>.





**Las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos.**

Otros actores esenciales, son las comunidades aledañas a los proyectos extractivos como actores con rol de decisión. Las empresas requieren la licencia social lo que implica un cierto grado de consentimiento de las comunidades para poder desarrollar su proyecto.

El presente diagnóstico recoge casos en los que las comunidades aledañas a proyectos extractivos los consideran como oportunidades de desarrollo y están dispuestas a participar en un relacionamiento con la empresa para lograr resultados concretos y tangibles. En estos procesos, las comunidades se han comprometido en un respeto a sus propias visiones de desarrollo y se relacionan con las empresas sobre la base del cumplimiento de esa visión. También, se comprometen con el gobierno nacional para contar con su presencia institucional en el territorio y la garantía del cumplimiento de sus derechos.

El diagnóstico muestra la evolución del relacionamiento respecto a la inversión de recursos en territorios ancestrales. Muchas de las buenas prácticas reportan el fortalecimiento de asambleas comunitarias y otros mecanismos de toma de decisión tradicionales mediante la presencia de la empresa en estos espacios para proporcionar la información y buscar el consentimiento de las organizaciones indígenas. En Colombia, el enfoque intercultural del relacionamiento de la empresa Cerrejón con un resguardo del pueblo Wayuú incluía el respeto a su cosmovisión, el uso del idioma Wayuú y la integración de autoridades indígenas tradicionales en la comisión de negociación. De esta manera, se respondió a las demandas de los pueblos indígenas por participación y autodeterminación, entendida como derecho a poseer, controlar, manejar y desarrollar el territorio<sup>45</sup>.



## 1.2. Los costos de los conflictos

Un relacionamiento deficiente donde las quejas y las preocupaciones de la comunidad se acumulan sin resolución durante largos periodos de tiempo causa e intensifica conflictos que a su vez generan costos para la empresa, Estado y comunidades.

Un estudio que analiza los costos para las comunidades de seis proyectos de inversión de gran escala (dos de agroindustria, dos de energía, y dos de minería) encuentra los siguientes tipos de costos que generan los conflictos a nivel comunitario<sup>46</sup>.

1. Financiamiento del movimiento opositor (honorarios de dirigentes, campañas mediáticas y publicitarias contra el proyecto, redes sociales).
2. Financiamiento de asesorías legales que permitan judicializar los proyectos.
3. Financiamiento de estudios técnicos para contrastar informes de la empresa.
4. Financiamiento de traslados para las movilizaciones, reuniones informativas, visitas a autoridades políticas.
5. Depreciación de viviendas y actividades económicas por habitar próximos al proyecto y asumir impactos ambientales.
6. Fractura del tejido social, en tanto los conflictos generan efectos psicológicos y emocionales, desconfianza, competitividad y descalificaciones entre los propios habitantes.

Para el Estado, el mismo estudio indica los gastos relacionados con el encarecimiento del proceso de licenciamiento ambiental y con eventuales juicios y peritajes. Adicionalmente, el Estado tiene costos de personal para enfrentar los conflictos, para policía y militares y debe asumir también precios políticos. El país en general puede perder productividad e ingresos, competitividad e inversiones extranjeras<sup>47</sup>.







El cálculo de los precios de los conflictos para las empresas resulta de la diferencia entre los gastos para la prevención y el abordaje de los conflictos (relacionados con la seguridad, contratación de personal especializado, capacitación del personal, entre otros) y los costos por los resultados del conflicto (modificaciones del proyecto, daños materiales, pérdida de productividad, reputación, entre otros)<sup>48</sup>.

Mención aparte merecen los costos derivados de la mala reputación generada por un relacionamiento deficiente que dificulta la búsqueda de nuevo capital y los auspicios de inicio de una operación en un nuevo país<sup>49</sup>.

Según una consulta realizada por el Fraser Institute, 36% de las empresas mineras encuestadas afirmó que la oposición pública a la minería ha afectado negativamente el proceso de autorización por parte del gobierno, resultando en demoras o rechazos de los permisos. La mayoría expresó que los argumentos de la oposición al sector extractivo fueron ambientales o de derechos de pueblos ancestrales<sup>50</sup>. Por otro lado el BID, señala que de un total de 200 proyectos de infraestructura que se enfrentaron con algún tipo de conflicto, 36 fueron suspendidos debido a los conflictos, 162 enfrentaron retrasos y 116 sobrecostos<sup>51</sup>.



Según un estudio de la organización BDO International, la mayor preocupación para los ejecutivos internacionales mineros son los retrasos existentes y potenciales de los proyectos mineros. En una encuesta, ejecutivos financieros de alto nivel de Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Australia y Canadá expresaron sus inquietudes acerca del acceso a capital y créditos durante 2013, principalmente por las interrupciones observadas en diversos proyectos mineros<sup>52</sup>.

En 2008, un análisis de 190 proyectos de las empresas más importantes del sector petrolero arrojó como resultado que el tiempo hasta el inicio de la operación casi se había duplicado respecto de la década anterior. La razón fue el incremento de los costos. Un análisis más detallado mostró que los riesgos no técnicos constituían 50% del total de los riesgos y que entre este 50%, el riesgo más significativo fue el relacionamiento con otros actores sociales<sup>53</sup>. Otro estudio de 19 empresas mineras de extracción de oro encontró que dos terceras partes de su valoración en el mercado fueron resultados de sus prácticas de relacionamiento con actores clave y solamente una tercera parte fue en función del valor del oro en el terreno<sup>54</sup>.

De lo anterior se desprende la perspectiva de riesgos, donde los costos de los conflictos también señalan la necesidad de una planificación oportuna en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Este relacionamiento debe atender y equilibrar la diversidad de necesidades e intereses de todos los actores y así permitir un clima mejorado de inversión y el logro de beneficios comunes para todas las partes involucradas.



## 2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL





A continuación, se detallan los hallazgos de las buenas prácticas de relacionamiento identificadas y validadas en Colombia. El análisis de cada país se inicia con un cuadro resumen del contexto, buenas prácticas, mapeo de actores y marco legal. Posteriormente, se describen las buenas prácticas con más detalles, las partes involucradas y el marco legal en el cual se insertan dichas buenas prácticas. Al final del documento, se presentan las conclusiones y recomendaciones principales.







## 2.3. COLOMBIA

María del Pilar Pardo Fajardo, Gestión Ambiental Estratégica:

mppardo@gestionambientalestrategica.com

Martha Cecilia Osorio Bustamante, Gestión Ambiental Estratégica:

mosorio@gestionambientalestrategica.com

### 2.3.1. Cuadro de Resumen

#### Contexto



**Económico:** el sector extractivo (minería e hidrocarburos) aportó 7,1% al PIB en 2016, de los cuales 5% corresponde a las actividades de hidrocarburos y 2,1% a minería<sup>119</sup>. La cifra correspondiente al 2010 fue 7%. En 2016, el sector extractivo en su conjunto aportó 49,01% a las exportaciones totales del país<sup>120</sup>. En la producción minera, el carbón y el ferróníquel son los productos más importantes de las exportaciones tradicionales y aportan 15,81% a las exportaciones totales, mientras que el petróleo y sus derivados aportan 33,20%. El sector contribuyó entre regalías directas (entidades territoriales como beneficiarias) e indirectas con un valor de 2.300 millones de dólares estadounidenses a la economía nacional en 2015<sup>121</sup>. Estas se generaron en un 80% por el sector de hidrocarburos y el restante 20% por minería. El sector extractivo creó alrededor de 178.000 empleos directos en 2016, lo que corresponde al 0,78% de la población total ocupada a nivel nacional<sup>122</sup>.

**Social:** Para transformar e incidir en los territorios, el gobierno requiere el relacionamiento con los diferentes actores: la ciudadanía (organizada y no organizada), el sector privado, las agencias de cooperación y demás actores que les permitan avanzar en la consolidación de sus políticas. Estas organizaciones cuentan con diferentes intereses, visiones, recursos (técnicos, de información, económicos) los cuales suelen convertirse en barreras para la inclusión en los escenarios de decisión<sup>123</sup>. El Atlas de Justicia Ambiental cuenta 69 conflictos (49 en el sector minero) en el sector extractivo<sup>124</sup>. No existe un registro oficial de los conflictos socioambientales. En algunos casos, grupos armados ilegales intervienen en los conflictos<sup>125</sup>.

#### Buenas prácticas



**Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal** (2010 - 2014, Colaboración). Diferentes empresas que sustraen carbón y autoridades ambientales acordaron un programa de fomento a proyectos productivos sostenibles y lograron más de 100 acuerdos con propietarios de terrenos agrarios sobre tipo de producción y condiciones de colaboración y la creación de una formación permanente.

**Diálogo intercultural con pueblo indígena** (2006 - 2013, Diálogo). Se desarrolló un proceso de diálogo entre los diferentes grupos representativos de la comunidad, incluyendo las autoridades tradicionales y la empresa Cerrejón, que contó con la participación de un asesor en temas culturales e involucró un equipo interdisciplinario de la empresa. El cumplimiento de los acuerdos fue validado en las asambleas regulares de la comunidad.

#### Mapa de Actores



En cuanto a las empresas y gremios, es importante resaltar la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Es la agremiación que agrupa a las compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo, la distribución de combustibles líquidos y lubricantes, y el gas natural. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) es una agremiación que nace de la integración de Asomineros de la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI), Cámara Colombiana de Minería y Sector Minería a Gran Escala, lo que permite



su proyección como un gremio articulador de la industria en su totalidad al representar exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios relacionados con el sector minero presentes en el país.

A nivel institucional nacional, el Ministerio de Minas y Energía es el ente rector encargado de la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos y energéticos. El Ministerio del Interior es la entidad encargada de la política de descentralización territorial, de derechos humanos y de la seguridad ciudadana. A su vez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el encargado de definir la Política Nacional Ambiental y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es la entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental. A nivel regional y local, las gobernaciones y las alcaldías son las autoridades administrativas territoriales, entre otras, las encargadas de orientar las inversiones para el desarrollo territorial. Por otra parte, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible son las encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Existen numerosas organizaciones sociales que incluyen fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, academia, entre otras que inciden sobre las dinámicas de relacionamiento en torno al sector extractivo. A través de diversos canales de participación, velan principalmente para que las empresas cumplan con sus obligaciones en la gestión de los impactos ambientales, sociales y económicos de sus operaciones. Estas organizaciones tienen diferentes niveles de incidencia, algunas más a nivel nacional otras más de ámbito local.

## Marco Legal y Regulatorio



El marco normativo colombiano es extenso, pues contiene disposiciones de carácter general para temas de participación, así como instrumentos legales (leyes, decretos y resoluciones) sectoriales.

Referente a la legislación sobre la participación ciudadana, es imposible negar el reconocimiento y la importancia que adquiere esta con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y sus posteriores desarrollos legislativos. A través de la Ley 134 de 1994 se dictaron las normas sobre los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Adicional a ello, existen otras normas que permiten a los ciudadanos participar de forma individual o colectiva en el control de la gestión pública, como es el caso de las Leyes 152 de 1994 (por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo). Por medio de la Ley 21 de 1991 se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y el Decreto 2613 de 2013 reglamenta este derecho. Mediante la Ley 850 de 2003 se reglamentan las veedurías ciudadanas.



### 2.3.2. Introducción

El gobierno colombiano decidió, a comienzos de la década pasada, promover a fondo la explotación de recursos naturales no renovables, aprovechando el aumento de precios de las materias primas en el mercado internacional. La decisión se basó en dos circunstancias: de un lado, la posibilidad de aprovechar el potencial geológico existente en el país, parte del cual ya venía siendo explotado por grandes empresas nacionales (Ecopetrol) y por otro, la oportunidad de apropiarse un importante volumen de rentas provenientes de la actividad extractiva<sup>126</sup>.

En Colombia, la actividad minera se encuentra estigmatizada ya que no existe un total entendimiento sobre lo que significa un proyecto minero, dado que en el país existen diversos tipos de minería<sup>127</sup>, las cuales tienen diferentes tecnologías, obligaciones y generan diferentes impactos. La diversidad de clases de minería, minerales y volúmenes de producción complejiza tener una narrativa minera que permita entender realmente la dinámica sectorial, la necesidad del Estado por valorizar y concesionar los recursos naturales no renovables y los impactos ambientales y sociales que genera esta industria. Ante esta situación, existen polarizaciones que han llevado el discurso y en especial en épocas electorales a que se escoja entre agua y oro<sup>128</sup>.

Las organizaciones de la sociedad civil han empezado a utilizar los mecanismos de participación que existen en el marco legal colombiano desde hace más de 25 años<sup>129</sup> como herramienta que garantiza y protege los derechos de las comunidades asentadas en los territorios con potencial minero.

En Colombia, el conflicto armado ha sido un determinante en las formas de entender el territorio. Con un Estado débil en zonas de conflicto, la ocupación se hizo con frecuencia de manera espontánea y sin planeación. El desplazamiento de la población a causa

del conflicto armado ha empujado la frontera agrícola y ha constituido un vector de expansión de grupos armados que construyeron su poder sobre la base del control territorial y social. Esta dinámica ha operado en una especie de círculo vicioso: el control territorial por parte de grupos armados impidió la presencia efectiva del Estado y la provisión de servicios básicos. Esta ausencia fue además terreno fértil para que se instalara la autoridad de grupos armados y prosperaran economías en la ilegalidad<sup>130</sup>.

En noviembre de 2016, Colombia firmó un acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más grande y antigua guerrilla del continente. El acuerdo propone una transformación profunda de la organización política y social con el propósito último de integrar a todos los territorios bajo un solo proyecto de nación<sup>131</sup>.

La implementación del acuerdo de paz incluye i) profundas reformas rurales, ii) la lucha contra las economías ilícitas, en particular el narcotráfico y iii) una apertura democrática que dé amplios espacios de participación política a sectores marginados de campesinos y comunidades negras e indígenas, así como a la reintegración económica de los excombatientes<sup>132</sup>.

### 2.3.3. Buenas prácticas

Durante la investigación, fue posible identificar, documentar y validar un total de dos buenas prácticas, en los niveles de Diálogo y Colaboración. Asimismo, se han identificado otras experiencias de relacionamiento que, aunque fueron documentadas, no se reconocieron en los niveles de relacionamiento por no cumplir con alguno de los criterios definidos en la metodología. No obstante, estas experiencias demuestran esfuerzos que quizás puedan ser consideradas para su sistematización y difusión en el futuro. Estas prácticas se encuentran en el anexo 3. El proceso de validación se realizó a partir de la información oficial entregada por las empresas. Algunos detalles del proceso de negociación y concertación no están disponibles ni fueron autorizados para publicarlos en el informe.

Las buenas prácticas identificadas están en el siguiente orden:

*2.3.3.1. Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal*

*2.3.3.2. Diálogo intercultural con pueblo indígena*



### 2.3.3.1. Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal

#### NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Colaboración



#### DURACIÓN

2010 – 2014



#### ACTORES PRINCIPALES

Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones El Tesoro, Norcarbón S.A, Drummond Ltd., Colombia Natural Resources.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Municipio de la Jagua de Ibirico; Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar. Fundación Pro-Sierra, familias campesinas que viven en la Reserva Forestal Nacional Los Motilones.



#### DESCRIPCIÓN

**Explotación minera:** en el departamento del Cesar (La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, y Becerril) se encuentra una de las principales zonas mineras carboníferas del país. Las explotaciones están a cargo de las empresas mencionadas. En 2016, en todo el departamento fueron extraídas más que 48 millones toneladas de carbón, equivalentes al 44% de la producción total del país<sup>133</sup>.

**Reserva Forestal Motilones:** en esta zona se ubica la Reserva Forestal de los Motilones que se extiende a lo largo de la Serranía del Perijá. El Ministerio de Ambiente autorizó la sustracción de áreas de la Reserva Forestal para continuar con las actividades de explotación minera de carbón concesionadas en la zona para las empresas mencionadas. Una vez autorizada la sustracción se estableció a cada una de las empresas sus respectivas obligaciones de compensación forestal.

**Plan de Compensación Conjunto:** en 2007, las empresas establecieron un Acuerdo de Voluntades para desarrollar un Plan de Compensación Conjunto, que además de cumplir con las obligaciones de compensación disminuía el área productiva de los predios que se acogieron al programa y aumentaba el área en conservación de la zona al implementar un plan que estableció un corredor de conservación y unos proyectos productivos que generaban ingresos adicionales a las familias que mejoraban sus ingresos. Dicho plan fue aceptado por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Regional Corpocesar<sup>134</sup>. El Plan de Compensación Unificado propuesto, respondió a cada una de las obligaciones de compensación establecidas a cada empresa y es financiado en su totalidad por las mismas.

**Conservación y producción:** el plan contaba con dos componentes principales: una estrategia de conservación de las áreas por un lado y unos proyectos productivos para la mejora y diversificación de los ingresos de los habitantes de las zonas de influencia de las empresas por el otro lado.

**Socialización:** el desarrollo del plan inició con una socialización del mismo y un prediagnóstico de las fincas interesadas en participar. Se programaron tres reuniones con las comunidades en la cuenca del Río Sororia y tres en la cuenca del Río Tucuy a las cuales asistieron representantes del Ministerio de Ambiente, Corpocesar y la Alcaldía de la Jagua de Ibirico.

**Acompañamiento e implementación:** las empresas contaron con el acompañamiento de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta para la implementación del plan como socio local quien facilitó la interacción con las comunidades. También, lideró los talleres y reuniones para lograr los acuerdos de los proyectos productivos.

**Selección participativa de proyectos:** se elaboraron encuestas de campo y se adelantaron varias reuniones de concertación para seleccionar conjuntamente los proyectos productivos, con base en la experiencia técnica de la Corporación Regional, los conocimientos de los habitantes y los pisos térmicos de la zona. En las reuniones participaron representantes de las empresas, los propietarios de los predios y técnicos de la Corporación Corpocesar.

**Acuerdo de Conservación:** con cada una de las familias participantes, se firmó un acuerdo de conservación que incluía el pago de un incentivo económico por la conservación de las áreas, el cual correspondía a un pago semestral durante cuatro años y el establecimiento de un paquete de proyectos productivos (siembra de cultivos permanentes y transitorios como tomate, cacao, café, y otros de subsistencia), determinados según el área y la ubicación de los predios.

**Mesas de trabajo:** a través de mesas de trabajo y reuniones con la comunidad, se conocieron y priorizaron los intereses de las comunidades campesinas, dentro de las cuales se determinó la necesidad de asistencia técnica especializada para los cultivos.

**Educación y capacitación:** en el marco del programa, se crearon espacios de educación y capacitación permanente con las escuelas como centros de formación. Se realizaron capacitaciones con personal técnico provisto por las empresas con los participantes del Plan Unificado para crear brigadas técnicas, brigadas antiincendios y protectores ambientales como garantes de la zona. Estas actividades hacían parte de los acuerdos establecidos con las familias pertenecientes al plan y con quienes se firmaron los acuerdos de voluntades, aunque no eran actividades obligatorias fueron capacitadas todas las familias vinculadas al Plan Unificado.



## IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

A la fecha se ha invertido por parte de las empresas más de 4,3 millones de dólares y se ha logrado conservar un corredor de cerca de 7.000 hectáreas lo que ha generado beneficios ambientales a la región.

Durante el proceso, se firmaron acuerdos con 195 predios donde se implementaron una diversidad de proyectos productivos (363,5 hectáreas) como siembra de cacao, aguacate, lulo (naranja), tomate de árbol entre otros, los cuales han generado ingresos adicionales a las familias participantes del programa y han logrado diversificar las actividades productivas de la zona. Eso ha disminuido la dependencia de empleos en la industria minera de los habitantes de la zona y la presión sobre los corredores de bosques establecidos para la conservación.





## INNOVACIÓN

En el sector extractivo en Colombia no es común que las empresas que operan en una misma zona formulen programas conjuntos que respondan a obligaciones ambientales y sociales. Habitualmente, cada empresa por separado presenta un programa, que es ejecutado en zonas dispersas. En este caso, cuatro empresas mineras del departamento del Cesar establecieron un acuerdo de voluntades con responsabilidad solidaria donde lograron articular sus obligaciones para ejecutar un proyecto conjunto que ha logrado la protección de áreas, la restauración de zonas degradadas, el establecimiento y mantenimiento de sistemas productivos (cultivos) para las familias campesinas, el reconocimiento a la población rural de incentivos ambientales y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.



## PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: los temas fueron postulados y priorizados por los habitantes de la zona en mesas de trabajo concertadas con las autoridades regionales y los representantes de las empresas.
- Pertinencia según necesidad: a través de un acuerdo de voluntades firmado entre grandes empresas mineras y autoridades se logró un Plan Unificado que reconoce las necesidades de la zona y sus habitantes.
- Sostenibilidad por consenso: el compromiso de las empresas, el seguimiento de las autoridades nacionales y regionales y la apropiación de la comunidad lograron un programa reconocido e institucionalizado que se está replicando en otras áreas de influencia de proyectos extractivos.





## ENFOQUES

Enfoque de Desarrollo Sostenible: La práctica apunta a un desarrollo sostenible entendiéndolo como un modelo integral e integrador, que articula de manera equilibrada las dimensiones económica, social, ambiental y cultural<sup>135</sup>. Esta práctica propone otras formas de integración entre empresas y comunidades campesinas buscando beneficios no solo ambientales sino sociales y económicos de largo plazo.



## LECCIONES APRENDIDAS

Se logran mayores beneficios para las comunidades cuando se establecen acuerdos de voluntades entre las empresas de industrias extractivas de una misma zona, las autoridades nacionales y regionales y las comunidades directamente impactadas.

La formulación e implementación de los programas son más eficientes cuando se cuenta con un socio local que es validado y reconocido por las comunidades, en el caso del Plan Unificado fue la Fundación Pro Sierra Nevada.

Es necesario realizar un acompañamiento constante a las comunidades para lograr mayor apropiación de los temas y los programas establecidos. Las empresas están diseñando una fase de seguimiento y sostenibilidad de las acciones establecidas que incluye el monitoreo y seguimiento al corredor de conservación establecido y el apoyo de los sistemas productivos mediante un encadenamiento para la comercialización de los productos.



## VALIDACIÓN

La práctica ha sido validada con los directores de sostenibilidad de las empresas, con habitantes de la zona y con miembros de la Fundación Pro Sierra que apoyaron el proceso de implementación de los acuerdos. Asimismo, fue validada durante la mesa de trabajo realizada en Colombia, el 11 de julio de 2017.



## BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<https://youtu.be/G-e4bTcTPEw>

<http://www.drummondLtd.com/programa-de-compensacion-forestal-de-la-serrania-de-perija/>

<http://www.grupoprodeco.com.co/es/sostenibilidad/gestion-ambiental/>

<http://www.corpocesar.gov.co/files/noticia179.pdf>

### 2.3.3.2. Diálogo intercultural con pueblo indígena

#### NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



#### DURACIÓN

2006 – 2013



#### ACTORES PRINCIPALES

Empresa Cerrejón. Resguardo Indígena (Wayuú) de Provincial (municipio de Barrancas), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.



#### DESCRIPCIÓN

**La Mina Cerrejón:** Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en La Guajira, departamento ubicado en el extremo norte de Colombia. La mina ubicada en la Guajira media está unida por un ferrocarril de 150 km al puerto de embarque de Cerrejón.

**Resguardo Provincial:** dentro de las comunidades del área de influencia de la mina está el Resguardo de Provincial que se encuentra ubicado en Jurisdicción del Municipio de Barrancas. Está compuesto por 447 hectáreas, 553 habitantes, 142 familias. La Asociación de Autoridades Tradicionales de Provincial está constituido por la autoridad tradicional (apushii). La jurisdicción territorial está compuesta por 6 sectores o comunidades: Provincial, Cerrito I y Cerrito II, Cardonalito, Tinajita y Atapchon. Provincial hace parte de la Asociación de Autoridades y cabildos Indígenas Wayuú del Sur de La Guajira “AACIWASUG”, agremiados a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

**Situación inicial:** los conflictos entre la comunidad y la empresa giraban en torno a los impactos percibidos por miembros del resguardo en términos ambientales (aire: gases y olores, emisión de partículas; agua: arrastre de material estéril y carbón al río Ranchería, principal fuente hídrica de la comunidad; ruido y vibraciones por voladuras) y la dificultad para acceder y comprar tierras lo que limitaba sus actividades agropecuarias. La participación de los miembros de la comunidad en las actividades de información generada por la empresa era baja, dada la percepción negativa que tenían de la empresa ya que no se sentían escuchados y no veían una oportunidad de diálogo.

**División del resguardo:** existía una división entre los líderes del resguardo por el poder dentro del mismo lo que generó una baja fluidez en la información al interior del territorio. Esto sumado a la directriz del Cabildo Gobernador a la comunidad de no participar en los espacios de información ofrecidos por la empresa generó desinterés y desinformación en la comunidad.

**Primer acercamiento:** la empresa, en 2005, propició algunas reuniones con las que buscaba informar a la comunidad sobre los impactos de la actividad. Sin embargo, estas reuniones no tuvieron un reconocimiento claro de las necesidades e intereses de las comunidades.

**Proceso pre judicial:** dada la división al interior del resguardo, las autoridades del resguardo le otorgaron poder al Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo para acompañarlos en el proceso de diálogo con la empresa. El colectivo recomendó iniciar un proceso prejudicial para presionar espacios de diálogo y propiciar acuerdos en temas relevantes como los ambientales, sociales y productivos.

**El Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo:** es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia. En 1980 adquirió su personería jurídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia, compuesta por abogados y abogadas.

**Reconstrucción relacional:** en vista del proceso prejudicial, la empresa promovió un espacio entre los representantes de la comunidad y la empresa que tuvo lugar durante un periodo de 6 meses y que se desarrolló con una periodicidad de 15 días aproximadamente.

**Comisión negociadora:** la comunidad seleccionó su comisión negociadora conformada por el Cabildo Gobernador, dos autoridades tradicionales, un profesor, un promotor de salud y un líder de la comunidad. Ocasionalmente eran autorizadas otras personas de la comunidad para participar en los espacios.

**Analista Wayuú:** la empresa hizo parte en las negociaciones con un grupo interdisciplinario y estableció la necesidad de contar con un analista de la etnia Wayuú, encargado del relacionamiento con este grupo de interés, considerando en todo momento sus usos, costumbres y lenguaje en las negociaciones.

**Importancia de asambleas comunitarias:** los espacios generados por la empresa permitieron fortalecer las asambleas del Resguardo como espacio existente, que se reconoció y sirvió para validar los acuerdos con la empresa, aún a pesar de las divisiones internas. Durante las asambleas se tomaron decisiones consensuadas y se informó a la comunidad en general y especialmente a las autoridades sobre el avance de los acuerdos.

**Mesa de trabajo y concertación:** la empresa y la comisión del resguardo conformaron una mesa de trabajo y concertación en la que se tomaron decisiones principalmente en los siguientes temas: tierras, ambiente, educación y trabajo en proyectos productivos.

**Acuerdos:** los miembros del resguardo y la empresa encontraron objetivos comunes los cuales fueron conciliados mutuamente y fortalecieron la capacidad para generar acuerdos que generaron beneficio mutuo para la comunidad y la empresa.

**Acuerdo vinculante:** comunidad y empresa construyeron un acuerdo mutuamente vinculante en el que reconocieron los temas de interés de la comunidad relacionados con tierras, generación de capacidades productivas, fortalecimiento de la vocación agrícola, incentivo a las prácticas responsables agrícolas y ganaderas, promoción de la seguridad alimentaria y promoción de la integración interna de la comunidad.





## IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

La empresa, con el apoyo de un analista Wayuú, promovió los espacios de diálogo para reconocer los temas que afectaban e interesaban a la comunidad, logrando superar un proceso prejudicial y fortaleciendo los espacios de decisión de la comunidad como las asambleas del resguardo. Se crearon mesas de trabajo y concertación que lograron acuerdos que fueron consultados validados y aprobados de manera autónoma con el consentimiento de la comunidad.



## INNOVACIÓN

Para recomponer el relacionamiento y lograr una relación de confianza, la empresa decidió incluir dentro de su comisión negociadora a un analista de la etnia Wayuú, encargado del relacionamiento con este grupo de interés que aseguró en todo momento la consideración de sus usos, costumbres y lenguaje en el relacionamiento. El contar con un analista, práctica poco común en los procesos con comunidades, garantizó el enfoque diferencial y la inclusión de la cosmovisión Wayuú, facilitando la elaboración de un acuerdo que refleja las necesidades, intereses y visión como comunidad.



## PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: La buena práctica reconoce cultura, idioma e idiosincrasia de las comunidades. Como parte de la comisión negociadora se incluyen líderes formales e informales de la comunidad, el Cabildo Gobernador.
- Pertinencia metodológica: La comunidad seleccionó su comisión negociadora que consultó de manera autónoma con la comunidad los acuerdos de cada reunión. Nada fue aprobado sin el consentimiento de la comunidad.
- Sostenibilidad institucional: Se logran acuerdos de largo plazo, institucionalizando procesos y generando acuerdos mutuamente vinculantes en torno a temas claves para los actores.



## ENFOQUES

Enfoque de Diversidad: El relacionamiento entre la empresa Cerrejón y el Resguardo de Provincial reconoce la diferencia cultural lo que se evidencia en el respeto a la identidad étnica de la comunidad.



## LECCIONES APRENDIDAS

Es necesario identificar los actores claves para mejorar el relacionamiento. El reconocimiento mutuo permite el fortalecimiento de la credibilidad. En el caso específico de Provincial fue importante que la comunidad nombrara una comisión negociadora con la que se sintieran representados y que facilitara los acuerdos ante la división por el poder del resguardo que existía al interior del mismo.

Se considera fundamental realizar visitas personalizadas a los actores, mantener un diálogo transparente en donde lo importante es escuchar los temas de interés para la comunidad.

Aún con el inicio de un proceso prejudicial, este proceso se pudo capitalizar y transformar a un diálogo abierto para potencializar los acuerdos con las comunidades.

Más allá de la atención de solicitudes aisladas del resguardo o del cumplimiento de las obligaciones legales, se construyó conjuntamente un acuerdo mutuamente vinculante en el que se incluyeron los asuntos de interés de la comunidad.

Hubiera sido relevante incluir dentro del proceso alianzas con entidades privadas y del Estado, para que sean garantes de los acuerdos y procesos. Asimismo, hubiera sido útil establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del avance de los programas y proyectos, así como espacios de rendición de cuentas de los representantes hacia su comunidad.



### VALIDACIÓN

La práctica fue validada directamente con la empresa (División de Estándares y Estrategia de Responsabilidad Corporativa). Asimismo se realizaron entrevistas y revisaron documentos de organizaciones de la sociedad civil que fueron observadores del proceso de diálogo como Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Crudo Transparente y Fundación Ideas para la Paz y validada durante la mesa de trabajo realizada en el marco de este estudio.



### BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse/gestion-social/relacionamiento-con-comunidades-indigenas/programa-de-emprendimiento.aspx>



### 2.3.4. Análisis de Actores

Las industrias extractivas son actividades económicas que generan dinámicas de cambio en los territorios. En particular, se caracterizan por su impacto social y ambiental, transformando las dinámicas territoriales en especial en materia económica, política y demográfica. Debido a que sectores de la población también reciben beneficios por razón de la inversión y de los posibles encadenamientos productivos, el resultado es que el ingreso al territorio de las industrias extractivas pueda dividir a la población, según sus intereses y posibles oportunidades.



A nivel institucional existen problemas de integración intersectorial y articulación de las entidades, especialmente a nivel central y territorial. Se refleja una baja presencia institucional en las regiones y poca capacidad técnica para abordar las problemáticas de relacionamiento en las regiones, lo que termina siendo asumido por los proyectos a un alto costo<sup>136</sup>.

La industria extractiva en Colombia cuenta con un historial de malas prácticas al trabajar de manera individualizada en los territorios, generalmente por blindarse de posibles consecuencias de su accionar, lo que localmente se interpreta como una falta de transparencia. En un contexto, además, donde a menudo ha coexistido un Estado débil a escala subnacional junto con la presencia de diversos grupos armados ilegales, se ha producido una ausencia de reglas del juego claras para el sector, con bajos niveles de gobernanza<sup>137</sup>. Esta situación ha generado un clima de desconfianza a escala local entre la institucionalidad pública, las comunidades locales y las empresas extractivas que han resultado en conflictos sociales, ambientales y económicos para las partes en los cuales se evidencia que no hay ganadores.

#### Empresa

En cuanto a las empresas y gremios, es importante resaltar la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) como agremiación que agrupa a las compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo, la distribución de combustibles líquidos y lubricantes, y el gas natural. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) es una agremiación que nace de la integración de Asomineros de la ANDI, Cámara Colombiana de Minería y Sector Minería a Gran Escala, lo que permite su proyección como un gremio articulador de la industria en su totalidad al representar exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios relacionados con el sector minero presentes en el país.





## Gobierno

A nivel institucional nacional, el Ministerio de Minas y Energía es el ente rector encargado de la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos y energéticos. Para atender el relacionamiento territorial, el Ministerio de Minas y Energía cuenta con el proyecto de "Fortalecimiento de la gestión institucional en el territorio y contribución a la gobernabilidad del sector minero energético nacional"<sup>138</sup> el cual tiene por objetivo mejorar el relacionamiento en territorio y reducir la conflictividad socio ambiental generada por el sector.

El Ministerio del Interior es el rector de la política de descentralización territorial, de derechos humanos y de la seguridad ciudadana, actor relevante ya que lidera el cumplimiento de acuerdos y la interlocución con las comunidades locales<sup>139</sup>.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el encargado de definir la política nacional ambiental y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)<sup>140</sup> es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental. A nivel regional y local, son las gobernaciones y las alcaldías las autoridades administrativas territoriales, entre otras, las encargadas de orientar las inversiones para el desarrollo territorial y garantizar el acceso de la población a redes de bienes y servicios públicos que satisfagan debidamente sus necesidades básicas.

A nivel local, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible están encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se convierten en la primera autoridad ambiental a nivel regional. Son entes de carácter público, integrados por las entidades territoriales, que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. También se encargan de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, convirtiéndose en una pieza clave del relacionamiento con las comunidades y su entorno. En relación con los recursos y condiciones con los que cada entidad cuenta para atender diversos retos y cumplir sus funciones como autoridad en materia ambiental, las mayores fortalezas de las corporaciones se encuentran en la gestión del talento humano, la ejecución de inversión y el apoyo organizacional, mientras que las principales debilidades están en la planificación del territorio, así como en la autoridad ambiental y capacidad física, tecnológica y financiera<sup>141</sup>.

## Sociedad Civil

La sociedad civil en Colombia está conformada por una variedad de asociaciones formales y no formales con la capacidad de construir puentes entre actores con intereses opuestos y proporcionar información sobre la industria extractiva. La Corporación Transparencia por Colombia ejerce actualmente la secretaria técnica de la Mesa de la sociedad civil para Industrias Extractivas y tiene mucha capacidad para fomentar procesos de diálogo y tejer redes entre la diversidad de actores. Crudo Transparente es otra organización que trabaja especialmente con industrias extractivas -hidrocarburos-, promoviendo buenas prácticas y generando espacios de concertación entre empresas y comunidades locales. Iniciativas de diálogo cuentan también con el apoyo de organizaciones extranjeras con sede en Colombia, como son la Fundación Ford, la Fundación AVINA o el Centro Regional de Empresas Emprendimientos Responsables.

Otras organizaciones buscan más el debate informado y la incidencia en la política pública. Foro Nacional por Colombia genera boletines y publicaciones en torno a las industrias extractivas y la sociedad civil con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia y promover la convivencia de los colombianos y las colombianas. La Corporación Ocasá impulsó el acceso a la información pública en torno a la industria extractiva, trabajando sobre todo con y por jóvenes. Por su parte, Censat Agua Viva es una organización que está más en oposición a las actividades extractivas y busca trabajar con comunidades para resistir, movilizar y transformar. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), tienen la misión de defensa de sus territorios, lo que muchas veces les lleva a situaciones de conflicto con empresas de sector extractivo.

### 2.3.5. Marco Legal

El marco normativo colombiano es extenso y prolífico, pues contiene disposiciones de carácter general por ejemplo sobre temas de participación ciudadana, así como instrumentos legales (leyes, decretos y resoluciones) sectoriales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir formas de relacionamiento con el sector extractivo. En los instrumentos legales, la única oportunidad formal de relacionamiento entre los sectores Estado, empresa y sociedad civil está presente en la consulta previa (Ley 21 de 1991) y solo aplica para el caso de comunidades indígenas y negras con presencia en los territorios de influencia de los proyectos, dejando por fuera gran parte de las comunidades que no tiene este nivel de reconocimiento y estatus.



#### Información

En 2014, se expidió la Ley de Transparencia y *Acceso a la Información*. Con esta ley se busca que el Estado entregue a los colombianos la información pública que soliciten, de tal manera que tanto las entidades públicas y privadas además de responder a las solicitudes expresas de información de los ciudadanos, también estén en la obligación de divulgarla "proactivamente, respondiendo a los requerimientos de forma rutinaria, práctica, actualizada, accesible y comprensible".

Dicha ley constituye una nueva herramienta para que la ciudadanía pueda acceder a la información pública de manera efectiva y transparente. Esto significa que no solo las entidades públicas, sino cualquier persona, movimiento, agrupación, partido o empresa con funciones públicas deben brindar acceso a dicha información, la cual debe ser entregada en igualdad de condiciones de manera ágil y mediante diferentes formatos, físicos o digitales, para que sea de fácil acceso para los peticionarios.



## Consulta

Para el sector minero, la principal directriz legal es el Código de Minas, que fue expedido en 2001, el cual tiene como alcance “fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país”. En los aspectos procedimentales de esta disposición se contempla un espacio de participación denominado Audiencia y Participación de Terceros (art. 259), que hace referencia a la etapa previa a la firma del contrato de concesión minera, en el cual pueden participar terceros interesados externos al proyecto, comunidades o grupos sociales, a través de figuras como terceros intervinientes.

A su vez, el Código de Minas establece las zonas mineras indígenas y de comunidades negras reconociendo el potencial minero que existe en áreas de propiedad de esas comunidades y el derecho de prelación frente a un interés de exploración y explotación de minerales. Adicionalmente, existe la posibilidad de asociarse con cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés minero; la norma no hace distingo alguno.

En el tema de consulta previa se definió un protocolo de coordinación institucional<sup>142</sup> con el propósito de facilitar: i) la coordinación interna de las entidades públicas involucradas, ii) la integración de las competencias, iii) la distribución eficaz de los recursos, iv) la circulación de la información relevante, v) garantizar la transparencia en los procesos, vi) seguimiento al cumplimiento de los deberes de los funcionarios de las entidades responsables.

En el sector de hidrocarburos, el Código de Petróleos es la norma por excelencia que rige al sector; a pesar de ser de 1953 la gran mayoría de las disposiciones se encuentran vigentes. En el caso en que se requiera adelantar consulta previa, deberá seguir las mismas reglas como del sector minero, expuestas en la parte de arriba de este acápite.

## Consulta Popular

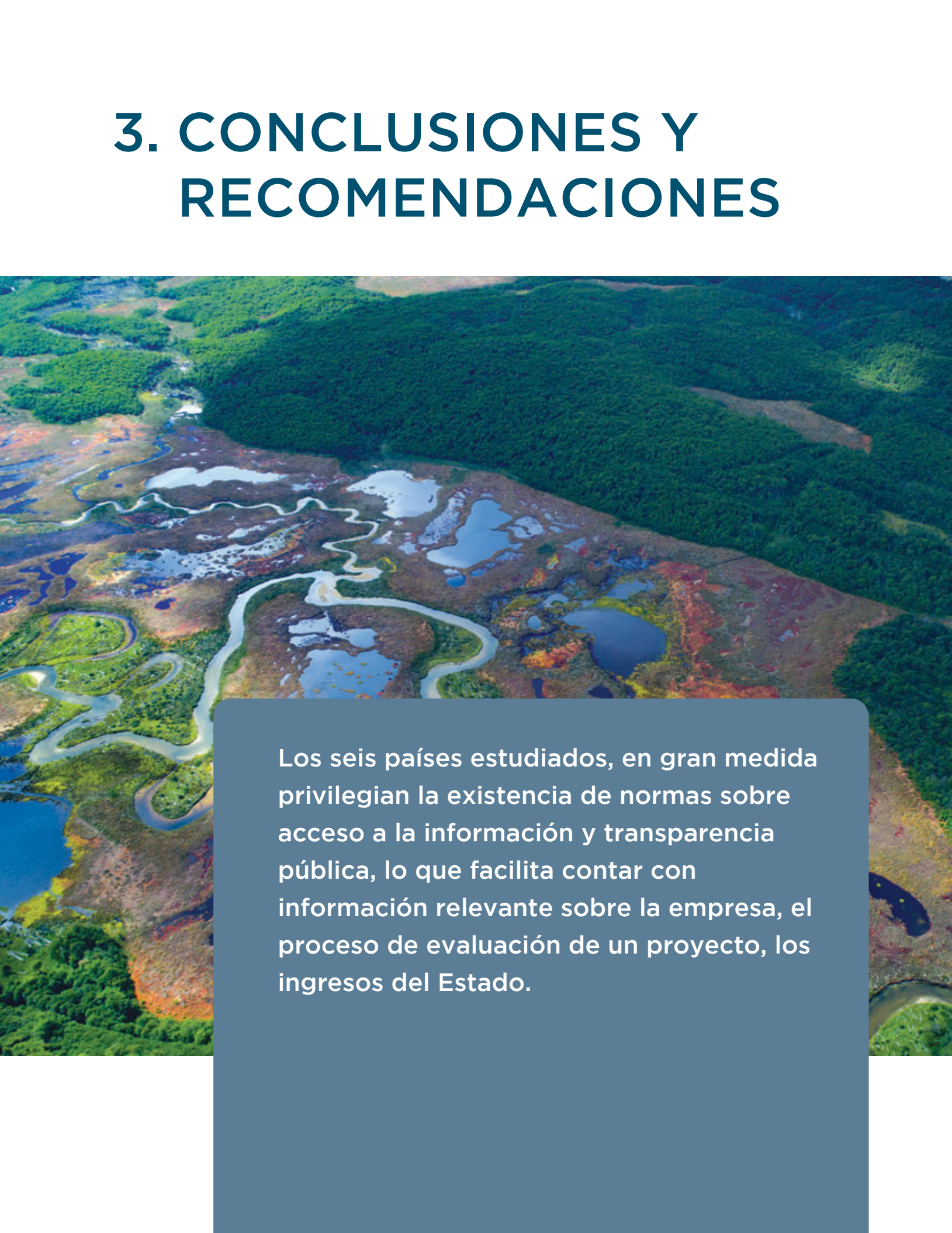
Las comunidades de Colombia están convocando, acudiendo y utilizando las consultas populares como mecanismos de participación directa y como herramienta para defender sus derechos económicos, sociales y culturales, estipulados en la Ley 134 de 1994. El Estado colombiano aún no reconoce la voluntad expresada por las comunidades y los resultados obtenidos en las consultas populares cuando estos se oponen a la realización de proyectos dentro de sus territorios; aunque estas consultas se realizan de manera democrática y están ajustadas a la normatividad constitucional y legal colombiana. Mientras la Corte Constitucional revisa la sentencia del Consejo de Estado para definir en efecto qué pasa tras el mecanismo de participación, lo realmente importante es entender por qué se están aumentando estas iniciativas de consulta popular y su real efecto sobre la economía, el empleo y la inversión del país.

Uno de los principales problemas está en la creciente concentración de la toma de decisiones en materia de industrias extractivas y grandes proyectos desde el gobierno central, sin contar con la participación de las entidades territoriales o los ciudadanos. A esto se suma que los diferentes municipios del país están haciendo una apuesta a unos modelos distintos de desarrollo, teniendo en cuenta aspectos como la agricultura para nuevos proyectos en sus comunidades. Las comunidades están viendo que las actividades extractivas no se están traduciendo en mejores condiciones de necesidades básicas, ni con oportunidades de desarrollo por lo cual están exigiendo otro tipo de emprendimientos en su territorio<sup>143</sup>.





### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita contar con información relevante sobre la empresa, el proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del Estado.

## 3.1. Conclusiones

### Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores

- El sector extractivo sigue manteniendo un sitio de importancia en cuanto a su aporte a la economía de América Latina, a pesar de la conclusión del denominado súper ciclo de los commodities mineros e hidrocarburíferos. Los marcos normativos nacionales se adecuaron para promover el arribo de grandes inversiones en este sector, como se puede apreciar en la apertura del sector hidrocarburífero en México, anteriormente bajo el monopolio estatal, con la reforma energética del 2014. Estas políticas han contribuido a que ingresen corporaciones internacionales las cuales han aumentado el nivel de los estándares de relacionamiento comunitario, y como consecuencia del incremento de la recaudación fiscal han contribuido, en conjunción con la sociedad civil, a impulsar mecanismos multi-actor que favorecen la transparencia, como es el caso de la EITI que viene operando auspiciosamente en algunos países de la región.

### Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento:

- En relación a los marcos normativos nacionales, aparte de la normativa referida a la industria extractiva, medioambiental, fiscal y de desarrollo, los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita a la ciudadanía contar con información relevante sobre la empresa, proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del estado en algunos casos. La información que proveen las industrias extractivas al Estado en el marco de sus obligaciones está sujeta a este marco regulatorio.
- Igualmente, las normas que contemplan la participación ciudadana como derecho a participar en las distintas fases de la actividad extractiva están muy extendidas en los seis países estudiados y se manifiesta, como una de sus dimensiones, a través de la figura de la consulta pública.
- La información identificada en cada país da cuenta de que no existe normatividad específica referida a otros niveles de relacionamiento como colaboración o alianzas a excepción de Perú que cuenta desde el año 2010 con una norma que establece un compromiso previo de la empresa con las comunidades del área de influencia, como requisito para el desarrollo de las actividades extractivas.
- El diálogo es un mecanismo que se encuentra, en sentido amplio, en todos los niveles de relacionamiento comunitario y está incorporado en segmentos de la normativa vigente al momento de regular los procedimientos participativos y de consulta.
- La mayoría de los países de este estudio han firmado el Convenio 169 de la OIT, salvo República Dominicana, pero solo Colombia, Perú y Chile cuentan con una reglamentación para implementarlo. De hecho, en los otros países el proceso depende de la interpretación hecha por las empresas y las autoridades locales, con posibilidades de cuestionamiento y judicialización del proceso, causando inestabilidad e inseguridad para las partes.



## Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador

- Cuando las prácticas están conformadas por varios niveles de relacionamiento, frecuentemente es el nivel de diálogo el que suele articularlas. Los diálogos podrían evolucionar hacia la definición de agendas de trabajo específicas.
- Debido al grado de complejidad que exige su implementación, por lo general, el relacionamiento a través de los niveles de colaboración y de alianza, suele producirse a través del diálogo multi-actor, en su versión más estructurada, al que fundamentalmente se recurre como mecanismo más propicio para aclarar los intereses y necesidades de las partes, así como para generar la confianza necesaria que exigen estos procesos complejos y negociar acuerdos de beneficio mutuo.
- El relacionamiento multi-actor adecuadamente organizado y gestionado y con mirada estratégica e integral, contribuye a implementar proyectos vinculados a planes de desarrollo local, a elevar las voces de los actores involucrados, a influir en las decisiones sobre la operación, así como sobre los planes de relacionamiento, a mejorar la relación y a contribuir al logro o la vigencia de la licencia social.

## Sobre los principales actores

### Sociedad Civil

- Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las comunidades, las ONG y los movimientos sociales, asumen diferentes roles frente a la industria extractiva: como proveedores o contratistas que ejecutan proyectos sobre desarrollo; tendiendo puentes e impulsando procesos colaborativos; siendo críticos de la forma como viene operando la industria; promoviendo el debate y haciendo incidencia en políticas públicas y en garantizar derechos individuales y colectivos de las comunidades u oponiéndose abiertamente a la actividad extractiva a través de acciones de resistencia.
- Las universidades que gozan de legitimidad son importantes recursos locales puesto que tienen la confianza de una cantidad relevante de actores como el poder de tejer redes con actores claves de diferente naturaleza, tanto en materia de generación de conocimiento como en el fortalecimiento de capacidades. Son vistos como un actor especializado e imparcial para asuntos técnicos y para realizar investigaciones sobre la industria extractiva.
- Las OSC se desempeñan también desde un rol de terceros en los procesos de relacionamiento entre comunidades y empresas, sea facilitando el diálogo o la negociación entre las partes, asesorando los procesos, capacitando a la empresa y/o comunidad para una participación adecuada y constructiva en los procesos, siendo observadores, o acompañando en la implementación de los proyectos de desarrollo.

## Estado

- La relación entre el Gobierno Nacional/Federal con los Gobiernos Regionales/Estatales/Provinciales y Locales suele generar tensiones derivadas de las políticas y medidas referidas a la gobernanza de los recursos naturales. En situaciones extremas, las tensiones, eventualmente, han llegado a una franca oposición y rechazo hacia la industria extractiva. Resulta, por tanto, importante que los diferentes niveles de gobierno establezcan mecanismos de coordinación y diálogo intergubernamental para la discusión concertada e implementación de políticas públicas referidas al desarrollo económico sustentable, y determinen cuál es el papel que juegan las industrias extractivas en el desarrollo del país y los territorios locales.

## Empresas

- Los equipos dedicados a la gestión social y el relacionamiento comunitario son imprescindibles para la operación de campo, articulados con las otras áreas de las empresas. Esta articulación interna es importante y necesaria. En algunos casos, las empresas optan por la contratación o suscripción de acuerdos con consultoras, organizaciones/entidades comerciales o de la sociedad civil especializadas en gestión social y relacionamiento comunitario. En algunos casos considerar a un equipo externo para apoyar el relacionamiento comunitario facilita los encuentros de diálogo, además de contar con una mirada externa del proceso.
- Los gremios de las industrias extractivas tienen como finalidad fundamental representar los intereses y necesidades de las empresas afiliadas. Tienen el potencial de ser importantes contribuyentes a través de proyectos dirigidos a las empresas en su relacionamiento con las comunidades, incluyendo perspectivas innovadoras, como la buena práctica de las Cuencas Sociales de Argentina, que desde la Cámara de Minería de Salta articula a las diferentes empresas mineras que operan en un territorio en su relacionamiento con las comunidades del entorno.

## Sobre los temas abordados en las prácticas

- Las buenas prácticas incorporan una gama temática sumamente amplia, vinculadas a las necesidades humanas y derechos de los entornos sociales y a las necesidades operativas de los proyectos extractivos. Desde un nivel básico de información sobre el proyecto, todos los niveles de relacionamiento dan pie a la incorporación de asuntos de múltiples tipos, como:
  - » Temas ambientales, como aquellos vinculados al agua, aire, ruido, uso de la tierra;
  - » Búsqueda de soluciones concertadas con la comunidad vinculadas a las necesidades de la operación (infraestructura en salud, vialidad, electricidad, agua potable, entre otros);
  - » Manufactura de productos;
  - » Educación y servicios básicos;
  - » Asuntos que atañen a grupos específicos como mujeres, adultos mayores, comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad;
  - » Cuestiones sobre desarrollo local;
  - » Establecimiento de relaciones duraderas en el marco del desarrollo sostenible y la licencia social;
  - » Fortalecimiento de la institucionalidad comunitaria y local.

## Sobre el relacionamiento

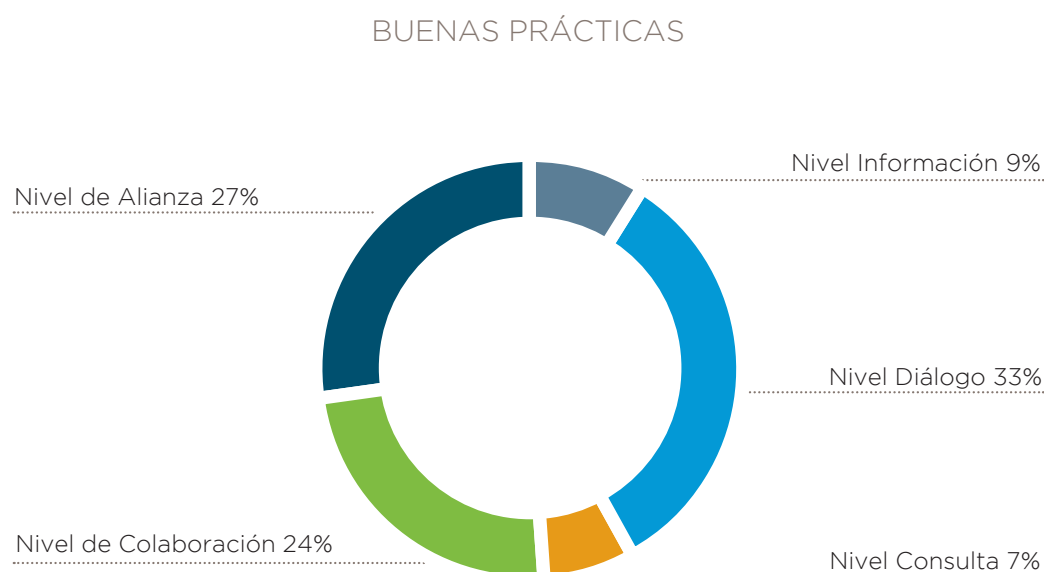
- *Aporte del sector extractivo en la economía nacional y regional:* Existe un reconocimiento de parte de todos los actores que el sector hace aportes relevantes a la economía nacional. Sin embargo, a nivel local las comunidades aun sienten que existe una deuda pendiente de parte de la industria al desarrollo y mejora local.
- *Estándares mínimos de relacionamiento:* La industria extractiva, en relación con otras actividades económicas, considera el tema del relacionamiento con las comunidades del área de influencia como parte relevante, inclusive en ocasiones como parte clave para el negocio y no como un tema netamente voluntario. Existe consciencia de los potenciales costos que puede significar para el desarrollo de un proyecto extractivo un entorno de riesgo social.
- *Lo exigido y lo voluntario:* Los procesos de relacionamiento reflejan que el comportamiento de la industria se derivan tanto de las normas definidas por el Estado como por las políticas internas de las empresas (códigos de conducta) y los estándares de la industria a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el Estado está empezando a asumir un rol más activo en definir estándares mínimos de relacionamiento, en base a las buenas prácticas reconocidas y con ello dar seguridad tanto a las empresas como a las comunidades sobre la mejor forma de establecer relaciones armoniosas y constructivas orientadas al desarrollo sostenible. Adicionalmente la industria sigue avanzando en políticas voluntarias que benefician el desarrollo del territorio en la cual está la operación.
- *Las OSC:* En los últimos 5 años han cumplido un importante rol, logrando una cierta incidencia en las decisiones de políticas públicas, a la hora de proponer, acompañar y velar por el cumplimiento de la normativa de los proyectos de la industria extractiva. Han logrado en los diferentes niveles (local, regional/provincial y nacional) de incidencia, que se reconozcan sus aportes para alcanzar objetivos comunes con la industria. Sin dudas esta incidencia se vio favorecida por el uso masivo de las redes sociales y el desarrollo de la transformación digital.
- *El relacionamiento con la sociedad civil en continuum:* La construcción de confianza es una tarea prioritaria. Adicionalmente quienes faciliten y participen en estos espacios de construcción de buenas prácticas de relacionamiento deben ser actores con conocimiento y trayectoria en esta materia, que faciliten los procesos de interacción; actores imparciales que construyan un relacionamiento permanente y útil reconociendo las diferencias de cada una de las partes.
- *Percepciones respecto a las industrias extractivas:* Aún existe rechazo hacia el sector extractivo por parte de algunos sectores. Generalmente, estos se basan en la percepción de que el crecimiento de la actividad extractiva no se ha traducido en mejores condiciones de vida para algunas comunidades que conviven con los proyectos extractivos, y que en algunos casos han visto desplazadas las actividades económicas previamente existentes (agricultura, turismo local, ganadería, entre otras), generando dependencia a una actividad finita, además de la preocupación por los impactos ambientales y a la salud que pudiera traer consigo esta actividad.



- *De conflicto al acuerdo negociado:* La revisión de algunas prácticas estudiadas da cuenta de que la relación entre la industria extractiva y las comunidades ha pasado de un proceso de conflicto y oposición a un proceso de negociación transaccional que compensa a las comunidades con beneficios sociales, empleo y obras de infraestructura. Esta dinámica eventualmente aporta a los procesos de desarrollo local.
- *Tejido interno de las comunidades:* Muchas veces, la complejidad de las relaciones al interno de las comunidades han generado tensiones que se traducen en reclamos de difícil comprensión y donde las empresas sin contar con metodologías para abordar la conflictividad de manera más amplia e integral.
- *Rol del Estado:* La característica histórica del Estado ha sido conservar una posición distante y mirar desde afuera los procesos de relacionamiento que se dan en los diferentes niveles entre las empresas y las comunidades. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un actor clave en el nivel de consulta.

## Sobre las prácticas de relacionamiento

- Este estudio ha encontrado en los diagnósticos de los seis países 27 buenas prácticas en todos los niveles de relacionamiento, 5 a nivel de Información, 18 a nivel de Diálogo, 4 a nivel de Consulta, 13 a nivel de Colaboración, y 15 a nivel de Alianza. Cabe agregar que en la mayoría de las buenas prácticas se han identificado dos o más niveles simultáneamente.



- Grandes avances: Las buenas prácticas del estudio muestran que ha habido varios avances en miras a mejorar la relación entre la industria y las comunidades, tales como la incorporación de políticas corporativas de relacionamiento, equipos de profesionales especializados y recursos económicos. Sin embargo, todavía hay debilidades en el relacionamiento entre la sociedad civil y las industrias extractivas. Las experiencias documentadas han contribuido al aprendizaje y a la generación de nuevas e innovadoras prácticas de relacionamiento que pueden ser aprendidas, mejoradas y replicadas en otros proyectos.
- Se considera que el sector extractivo tiene una gran experiencia de buenas prácticas, reconocidas y validadas con resultados positivos para la calidad de vida y el relacionamiento de actores, labor que debería ser orientada tanto a las comunidades, academia como a las propias empresas.
- Un conflicto observado en la mayoría de las buenas prácticas estudiadas es la oposición al proyecto por parte de la comunidad, por la forma en la que el proyecto convive con su entorno (ambiental, social, cultural) y/o por la falta de beneficios directos y al desarrollo de la comunidad. El diálogo se destaca como el canal necesario para resolverlo, siendo una alternativa para establecer acuerdos y negociar con la comunidad. Los espacios de diálogo se hacen necesarios para resolver las problemáticas de pequeños sectores rurales del entorno de una gran explotación extractiva. Por ejemplo, alianza para mejorar la producción ganadera .
- Instancias de participación ciudadana temprana: Las decisiones que se toman sobre los proyectos de gran escala nacional, muchas veces no cuentan con la participación efectiva y el consenso de los gobiernos locales y comunidades de los territorios. Sin este paso que le da legitimidad social al proyecto, los procesos de participación ciudadana (incluyendo la consulta previa) se tornan complejos, lentos y/o conflictivos.
- Las alianzas entre OSC han comenzado a jugar un papel de acercamiento comunitario, como es el caso del Clúster de Energía Coahuila cuyo papel, entre otros, es informar sobre las implicaciones de la reforma energética y el nuevo papel de las empresas en la región. La intermediación de la sociedad civil puede ayudar en que la información sea más confiable y por ello mejor aceptada por las comunidades.

## 3.2. Recomendaciones

### Para las empresas

- Contar con una planificación temprana, oportuna y a largo plazo de relacionamiento con las comunidades que contribuya al progreso económico y atención de temas de orden social y ambiental en los territorios donde desarrollan sus proyectos.
- Contar con un área dedicada exclusivamente a la gestión social y las relaciones comunitarias. Este estudio, ha podido constatar que contar con un área y equipo de trabajo idóneo ha ayudado a las empresas a desarrollar mejores prácticas.
- Considerar las particularidades del territorio y asimilar como una buena práctica el reconocimiento de los derechos de las diferentes comunidades. Se recomienda incluir dentro de sus protocolos de debida diligencia un levantamiento de información detallada sobre la dinámica del territorio y las comunidades presentes en el área de influencia, ya sea de la mano de la comunidad o posteriormente validada por ella.
- Coordinación regular con los líderes comunitarios desde el principio involucrándolos en los diferentes niveles de relacionamiento, información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas.





- Generar acciones por nivel de información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas que sean revisadas sistemáticamente, que incluyan plazos para su revisión y que sean flexibles para ser replanteadas, que tengan objetivos, metas y tiempos bien definidos desde el principio, que se apeguen a la legislación y que busquen un relacionamiento con acompañamiento constante y sistemático.
- Seguimiento a las acciones derivadas de la legislación referida a las industrias extractivas, en lo ambiental y en lo social, con el cumplimiento y continuidad a los acuerdos de las mesas de diálogo con coordinación intersectorial e intergubernamental.
- Fortalecer a los gremios y organizaciones representativas de las empresas que pueden participar en los más diversos espacios de diálogo y concertación para una mayor fluidez en el relacionamiento.
- Propiciar capacitaciones para fomentar alianzas con proyectos en los territorios, incentivando la participación comunitaria.
- Considerar a las Agencias Multilaterales de Desarrollo (MDB por sus siglas en inglés) líderes en América Latina y el Caribe que cuentan experiencia en el relacionamiento ciudadano<sup>271</sup> para un enfoque interdisciplinario en la región y con experiencia comparada en temas de sociedad civil como aliados técnicos en la elaboración de planes de relacionamiento, así como a OSC del país con experiencia territorial, para fortalecer los principios de relacionamiento entre empresas y comunidades gracias a sus conocimientos técnicos y cercanía con la comunidad.
- En la medida que las actividades extractivas van a producir afectaciones ambientales, se recomienda que las empresas prioricen el cumplimiento ambiental en el marco de las legislaciones nacionales, así como el relacionamiento social con información oportuna, veraz y transparente, promoviendo el relacionamiento con las comunidades para el análisis de los problemas y la toma de decisiones.

## Para la Sociedad Civil

- Formar una estructura orgánica que permita dar a conocer los líderes comunitarios representativos como legitimados para dar información en tiempo oportuno, interactuando con el gobierno, las empresas y otras comunidades si fuera el caso, para la elaboración de iniciativas conjuntas en el marco de un relacionamiento sistemático y no solo circunstancial.
- Por la disparidad de culturas, ritmos y tradiciones, es necesario que el Estado y las empresas adapten espacios de relacionamiento a esta realidad. Asimismo, las propias comunidades para alcanzar resultados efectivos han de identificar los recursos para acercar sus enfoques de un modo oportuno.

- Asegurar la integración de los miembros de las comunidades por parte de los líderes comunitarios, en las decisiones sometidas a consulta como así en aquellas instancias de influencia a través de mesas temáticas que contemplen la disparidad de género, y con el fin de facilitar la formación de capacidades, así como la apropiación de conocimientos por parte de la comunidad. El trabajo de los líderes comunitarios para la participación significativa de la comunidad evidenciada en las prácticas analizadas ha sido clave para transformar la percepción que tienen las comunidades sobre la industria extractiva, mejorar las relaciones existentes y prevenir el surgimiento de conflictos.
- Los líderes comunitarios deben estimular y promover la disseminación de información oportuna así como diálogos con miembros de la comunidad y de las personas de las empresas cuyas labores están relacionadas, para la elaboración de planes y estrategias de relacionamiento en las distintas fases de la actividad extractiva.
- Los líderes comunitarios y las empresas pueden apoyar procesos de acompañamiento, formación y capacitación, orientados a fortalecer capacidades de diferentes grupos comunitarios (mujeres, jóvenes, minorías) en procesos que incorporen una mirada integral de territorio, para que se pueda tener un desarrollo sostenible e independiente de la presencia de la empresa.
- Contactar a actores imparciales, (como universidades), para la resolución de problemas y toma de decisiones en relación a conflictos internos de la comunidad o con los otros actores (gobiernos, empresas).

## Para el Estado

- Implementar acciones de monitoreo periódico para recibir retroalimentación sobre la percepción que tienen tanto la sociedad civil como la empresa. La experiencia muestra que el monitoreo es importante para involucrar a otros actores y sectores, comunicar sobre la práctica, dar más transparencia y hacer ajustes necesarios de acuerdo con especificidades locales.
- Contar con metodologías para las consultas públicas incluyendo a las autoridades locales, minorías (grupos de mujeres, ancianos, jóvenes). Se sugiere construir procesos sistemáticos y periódicos de los niveles de información y diálogo, habilitando la colaboración con mecanismos de quejas, accesibles desde la misma comunidad y de forma anónima.
- Promover la participación ciudadana temprana indispensable para generar espacios de relacionamiento que promuevan oportunidades de crecimiento y mitiguen impactos adversos potenciales de las operaciones de extracción, prevenir conflictos, construir confianza y legitimidad social, así como optimizar el valor potencial en las regiones.
- Reglamentar la aplicación de la Convención OIT 169 con estándares mínimos para las consultas públicas. Respaldar la labor de los organismos de supervisión, fiscalización y de revisión de los estudios ambientales, sosteniendo y afinando los mecanismos de participación y Consulta Previa (Convenio 169 OIT), el fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo y otras instituciones de defensa de los derechos ciudadanos.
- Fortalecer los instrumentos ambientales que permitan a la autoridad ambiental vigilar el cumplimiento de los planes de mitigación y los compromisos en materia del cierre de proyectos extractivos. La planeación anticipada del cierre económico y ambiental

es un aspecto de gran relevancia para contener pasivos ambientales y sociales y a la postre mejorar la percepción que tienen las comunidades en la zona de influencia de los proyectos y de la población en general.

- Fortalecer mecanismos de transparencia para la administración de los fondos generados por las rentas de la actividad extractiva apoyando nuevos proyectos, que a su vez generen nuevos emprendimientos en las regiones ricas en recursos naturales de modo de asegurar la creación de empleos de fuentes alternas, que fortalezcan las economías locales innovando y generando ingresos a largo plazo.
- Capacitar a los gobiernos locales sobre los temas que afectan los intereses de sus territorios, apoyando la generación de capacidades políticas y técnicas que apoyen y articulen los procesos de ordenamiento territorial.

## Para los tres actores

- Utilizar las nuevas tecnologías a favor de formas más eficaces de relacionamiento. La madurez de los sistemas democráticos de la región, el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías, está dando una oportunidad sin precedentes para que responsables de los gobiernos, oficiales de empresas y líderes comunitarios cuenten con nuevos instrumentos de acercamiento e información para la discusión de intereses territoriales comunes.
- Tanto desde los gobiernos, como desde las empresas y de las comunidades, resulta relevante fomentar y acercarse a través de espacios de relacionamiento con acciones de información oportuna y confiable; promoción de diálogos que incluyan minorías, consultas públicas siguiendo regulaciones sectoriales que hayan contado con instancias de información y dialogo previos, promoción de colaboraciones en formación de capacidades que permitan un desarrollo territorial sostenible, promoción de alianzas en acciones de monitoreo participativo y/o de desarrollo de pequeñas empresas.
- Construir planes de relacionamiento iniciado por cualquiera de los actores principales, con actividades claras genera confianza, por lo que un rol más activo del gobierno y de grandes empresas en el fomento de espacios de concertación, donde las comunidades participen contando con la previa información y capacitación para exponer intereses y preocupaciones representa, como lo demuestran los hallazgos, un avance para el crecimiento sostenible.
- Incluir a otros recursos existentes, OSC locales, y sobre todo universidades con legitimidad para fortalecer un relacionamiento sostenible.
- Informar y revisar las proyecciones sobre los recursos de las industrias extractivas y los límites para la dinamización de la economía, reconociendo que esta es una actividad que depende de una serie de variables ajenas a planificaciones específicas. En particular, los espacios subnacionales han de proyectar sus actividades considerando recursos de otras fuentes y del sector extractivo, de forma de no generar frustraciones por eventuales variaciones en las transferencias desde el gobierno nacional. En este aspecto se requiere reforzar la información y análisis de las proyecciones de las industrias extractivas con autoridades y líderes de la sociedad civil, teniendo como base las acciones de transparencia de las industrias extractivas en marcha.



## 4. HOJA DE RUTA

A continuación, se propone una hoja de ruta elaborada a partir de los hallazgos del diagnóstico. La misma tiene como objetivo ofrecer lineamientos claros a representantes de empresas, de agencias gubernamentales y de la sociedad civil, para fortalecer la articulación de estos tres actores, promoviendo espacios de interacción que se enfoquen en el territorio y respondan a las necesidades de las comunidades. Esto con la meta última de contribuir con los esfuerzos para promover una actividad extractiva responsable como sinónimo de desarrollo.







# Hoja de Ruta de Colombia

## GOBIERNO



### Nivel Información

La viabilidad de un proyecto extractivo en Colombia requiere de dos tipos de autorizaciones: por parte de la Agencia Nacional de Minería por un lado y la licencia ambiental por parte de la autoridad competente por otro lado. También, en Colombia el marco normativo contiene varias disposiciones para temas de participación ciudadana. Sin embargo, la participación de la sociedad civil, generalmente se da cuando los proyectos ya se encuentran autorizados y licenciados.

Al respecto, sería importante considerar la buena práctica de Argentina: Cuencas Sociales como área de intervención, donde se logró coordinar la entrega de información de las empresas a las comunidades, contando con la participación del gobierno quien oficializa un acta con las necesidades, preocupaciones e intereses de la comunidad y los compromisos asumidos por las empresas.

De esta manera, el primer esfuerzo debería realizarse entre las autoridades para definir la viabilidad de potenciales proyectos antes de otorgar la licencia. De manera complementaria, es recomendable que el Ministerio de Minas y Energía adelante una estrategia de relacionamiento con las autoridades departamentales y municipales donde se realizarán las actividades extractivas para acordar entre entidades públicas las restricciones y condiciones de las áreas con potencial de intervención.



### Nivel Diálogo

En los últimos años han sido activados mecanismos de participación ciudadana en el ámbito político como consultas, referendos, iniciativas populares y cabildos abiertos<sup>272</sup>; todos estos dirigidos a la defensa de los recursos naturales y de los territorios.

Es aconsejable definir, generar y apropiar espacios de relacionamiento contextualizados que reduzcan las asimetrías entre las partes para poder generar acercamientos y facilitar espacios en los diferentes niveles de relacionamiento. La experiencia del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible en Perú, puede dar pautas para desarrollar diálogos articulados entre diferentes niveles.

Para el Gobierno, se sugiere participar en espacios colectivos o mesas de trabajo para ser garante de los acuerdos o compromisos adquiridos entre la empresa, las autoridades locales y miembros de la sociedad civil, generando un diálogo permanente y útil para cada uno de los sectores. Este rol cumple el Estado, por ejemplo, en la experiencia de Cuencas Sociales como área de intervención en Argentina.





### Nivel Consulta

A nivel de Consulta en Colombia, es la Ley 21 de 1991 el instrumento legal a través del cual se reglamenta la consulta previa como única oportunidad formal de relacionamiento entre los tres sectores. Sin embargo, esta normativa solo aplica para el caso de comunidades indígenas y afrodescendientes con presencia en los territorios de influencia de los proyectos, dejando por fuera gran parte de las comunidades que no tiene estas características.

En aras de evitar potenciales contradicciones y conflictos entre autoridades de nivel nacional y local y las comunidades presentes en la zona de influencia de los proyectos, se considera una buena práctica la articulación y coordinación institucional antes de ofertar un área para exploración y posterior explotación minera o petrolera. Lograr una articulación entre instituciones evitaría trasladar al inversionista/empresa la incertidumbre de los territorios y de las áreas excluibles de proyectos extractivos por restricciones ambientales o sociales.

Al respecto es interesante destacar el proceso de Chile: **Participación Ciudadana en etapa de elaboración del EIA proyecto Minero Nueva Unión**, en donde se inició un proceso de participación ciudadana anticipada, es decir, antes de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingresara para ser evaluado ambientalmente con la finalidad de informar e incluir tempranamente las observaciones de las comunidades locales en el desarrollo del EIA y de esta forma consensuar a través de mecanismos de diálogo que permitieron recoger los temas de interés y dar cuenta de los avances y resultados.



### Nivel de Colaboración

La legislación colombiana carece de mecanismos que promuevan la Colaboración y formación de alianzas entre los actores. La colaboración entre los sectores se da generalmente en el ámbito local a partir de interacciones generadas por el Diálogo multi-actor. Una vez los proyectos son licenciados e inician operaciones en las regiones, se generan los relacionamientos entre empresas, comunidades y autoridades. En especial, a partir de mesas de trabajo donde se logran consolidar acuerdos que redundan en compromisos de Colaboración.

Al respecto, es importante destacar la práctica de Perú: **Monitoreo ambiental participativo en Orcopampa**, donde se estableció un comité de monitoreo ambiental formado por delegados de las comunidades, la empresa minera, el gobierno local, ONG, entre otros, permitiendo un monitoreo participativo y regular de la calidad del agua y abriendo un espacio de relacionamiento para conversar sobre otros temas.

Lograr generar y mantener espacios de Colaboración donde se disponga de una lectura regional de los proyectos facilita la concepción de acuerdos y alianzas entre los sectores.



### Nivel de Alianza

No se cuenta con una normativa específica que promueva las alianzas entre los sectores. Estas alianzas generalmente se dan a partir de acuerdos motivados por el cumplimiento de obligaciones ambientales o sociales interpuestas una vez el proyecto es licenciado e inicia su intervención en el territorio. Dichos acuerdos son establecidos generalmente entre empresas y comunidades, siendo las autoridades un garante o veedor de los acuerdos en el marco del cumplimiento de los actos administrativos.

## EMPRESA EXTRACTIVA



### Nivel Información

A nivel de Información, el país cuenta con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), que, aunque no es específica para las industrias extractivas, sí promueve el acceso a la información pública de manera transparente, oportuna y eficaz, lo que facilita a la ciudadanía contar con información relevante sobre los proyectos.

Es de resaltar que la mejor práctica que puede desarrollar una empresa es tomarse el tiempo necesario para socializar y explicar el proyecto que pretende adelantar, utilizar los canales institucionales para llegar de la mejor manera al territorio y vincularse a los instrumentos y esquemas de planificación y administración pública; identificar los programas y proyectos de inversión local que merezcan ser fortalecidos sea a través de esquemas de incentivos o apoyo para lograr más o mejor cobertura social. Un ejemplo es la participación ciudadana en etapa de elaboración del EIA proyecto Minero Nueva Unión en Chile.

Es una oportunidad de lograr un mejor relacionamiento, poner a disposición de la región la información de los proyectos, previo al inicio de cualquier actividad en campo, donde se informe claramente cuáles son los canales de comunicación que tiene cualquier representante de la sociedad civil sobre el proyecto.



### Nivel Diálogo

La buena práctica de ***Diálogo intercultural con pueblo indígena en Colombia*** ha generado acciones favorables para promover el Diálogo con comunidades indígenas. La empresa al reconocer las necesidades e intereses de las comunidades vinculando una analista que conoce y comparte la idiosincrasia y lenguaje, generó confianza, guió y facilitó el diálogo y la construcción de acuerdos.

En los espacios de Diálogo, es importante tener miradas de largo plazo, de carácter estratégico, y no solo respuestas a problemas inmediatos. El propósito principal es construir acuerdos en lugar de solamente ratificar las diferencias (de intereses, de narrativas, de visiones, etc.). El diálogo debe ser incluyente, no exclusivo y adaptado a cada uno de los actores involucrados.





### Nivel Consulta

Merece la pena resaltar la experiencia de Chile, sobre la **Participación Ciudadana en la etapa de diseño del EIA** donde a través de un proceso de participación de las comunidades se lograron incluir tempranamente las preocupaciones de las comunidades locales en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y de esta forma consensuar a través de mecanismos de diálogo que permitieron recoger los temas de interés y dar cuenta de los avances y resultados. Es recomendable facilitar espacios de participación en los que pueda ser consultada la sociedad civil desde las etapas tempranas de los proyectos, lo cual no los exime de los espacios oficiales establecidos en el marco legal de participación ciudadana.



### Nivel de Colaboración

A nivel de Colaboración es importante resaltar la buena práctica desarrollada en Colombia por varias empresas mineras en el Departamento del Cesar, como es la de **Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal** en el que no solo se agruparon las obligaciones de inversión de varias empresas mineras presentes en una misma región, sino que se formularon estrategias de Colaboración, a través de acuerdos de conservación con las familias campesinas participantes. Otro ejemplo es la práctica Cuencas Sociales como área de intervención, Argentina. Lograr generar acuerdos entre varias empresas mineras presentes en una zona maximiza los beneficios de las comunidades locales y aporta confianza en el relacionamiento con las empresas presentes en los territorios.



### Nivel Alianza

La estrategia de Alianza construida en México denominada **Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA)**, que busca impulsar el desarrollo social a partir de la corresponsabilidad entre los sectores público y privado en comunidades, cobra relevancia para Colombia, ya que cuenta con una empresa de economía mixta llamada Ecopetrol y que tiene participación en gran parte de los bloques petroleros adjudicados en el país. Sería provechoso que buscara replicar esta buena práctica.

## SOCIEDAD CIVIL



### Nivel Información

Involucrarse desde las etapas tempranas de un proyecto minero permite que la comunidad y el proyecto minero manejen la misma información desde el inicio de los estudios, por eso la buena práctica adelantada en Chile **Participación Ciudadana en etapa de diseño del EIA** donde se utiliza un enfoque participativo en la producción de la información del estudio de impacto ambiental, es tan relevante. Es importante desarrollar acciones y agendas de trabajo que permitan implementar y mejorar los diferentes niveles de relacionamiento para compartir y generar información y conocimientos. Incentivar la participación ciudadana a nivel local es importante para incidir en la toma de decisiones informada.





### Nivel Diálogo

Los diálogos multi-actores han sido una experiencia liderada principalmente en el Perú y que se ha replicado en países como Argentina, Colombia, Chile, entre otros. El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible en el Perú se ha constituido como un canal de interacción de múltiples actores, incorporando enfoques innovadores como la integración de formas lúdicas, el tratamiento del yo, las relaciones de género, contando con un soporte múltiple para la sostenibilidad del espacio. La apuesta de sociedad civil es generar espacios descentralizados, con base a la configuración política administrativa (región, municipalidad) o de cuenca, convocando representaciones institucionales para el desarrollo como en Argentina o con participaciones más personales de líderes multi-actor.



### Nivel Consulta

En Colombia la consulta se entiende en el marco de la Convención 169 de la OIT, la cual está reglamentada por el Decreto 2613 de 2013. Sin embargo, esta investigación ha encontrado que las decisiones que se toman sobre los proyectos de gran escala nacional, muchas veces no se negocian con los gobiernos locales y las comunidades de los territorios donde se ejecutarán, de manera que los procesos de participación ciudadana (incluyendo la Consulta previa) se tornan complejos y lentos. Es aconsejable reconocer las particularidades del territorio y los intereses de sus comunidades como una buena práctica de relacionamiento a nivel de Consulta e incluir dentro de la planeación y desarrollo de los proyectos la dinámica de los territorios y sus individuos.



### Nivel Colaboración

En términos de Colaboración, merece la pena explorar la experiencia mexicana sobre **Monitoreo participativo de la calidad del agua**, ya que permite la participación no solo de comunidades presentes en el área de influencia del proyecto sino representantes de la academia/universidades regionales que pueden fortalecer los protocolos de muestreo y el conocimiento sobre la relación del recurso hídrico con otras especies indicadoras en un paisaje, como lo han logrado también en Perú en los ejercicios de **Monitoreo Ambiental participativo en Orcopampa**.



### Nivel Alianza

Las comunidades se verían altamente beneficiadas al fortalecer sus capacidades para el desarrollo de proyectos sostenibles, en niveles de Alianza y Colaboración. Existe un interés superior en que las comunidades permanezcan en sus territorios, generando productividad y evitando que las actividades extractivas generen desplazamientos humanos. En ese sentido, una buena práctica desarrollada en Colombia por varias industrias mineras en el Departamento del Cesar, ha sido la **Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal** en el que no solo se agruparon las obligaciones de inversión de varias empresas mineras presentes en una misma región, sino que se formularon estrategias de colaboración, a través de acuerdos de conservación con las familias campesinas participantes, en las que se incluía incentivos económicos y capacitaciones técnicas para el florecimiento y desarrollo de negocios sostenibles al tiempo que se interiorizaron acciones de conservación de las zonas de influencia del proyecto.



## Notas del diagnóstico regional

1. La mayoría de los proyectos extractivos se encuentra en el área rural y las comunidades aledañas son los principales actores afectados con los que se buscan relacionar las empresas en primera instancia. Otros actores importantes son municipios pequeños con un alto índice de población rural. Proyectos cercanos a ciudades medianas o grandes, como en el caso de Arequipa, Perú, o en Chile, son menos frecuentes, ver por ejemplo: Valor Minero, 2017: Los desafíos para el desarrollo futuro de la minería en la zona central, Las Condes; Valor Minero, [http://valorminero.cl/site/docs/2017/desafios\\_desarrollo\\_futuro\\_mifffferia\\_zona\\_central.pdf](http://valorminero.cl/site/docs/2017/desafios_desarrollo_futuro_mifffferia_zona_central.pdf).
2. Cameron, Peter, y Michael Stanley, 2017: Oil, gas and mining – A sourcebook for understanding the extractive industry, Washington: The World Bank, p. 19.
3. Los criterios como también los detalles de la metodología empleada se encuentran en el anexo 1.
4. Ver marco metodológico conceptual (anexo 2). Para mayor información ver BID, 2018: Grupo BID – Sociedad Civil, <https://www.iadb.org/es/sociedad-civil/home>
5. Ver Milano, Flavia y Andrea Sanhueza, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para agencias ejecutoras pública y privadas, Washington: BID, <https://publications.iadb.org/handle/11319/7499?locale-attribute=es&>
6. A los fines de esta investigación son los recursos no renovables petróleo, gas y minerales metálicos, estatales en cualquier fase del ciclo de la extracción (prefactibilidad, factibilidad, exploración, explotación)
7. La página web de la ICCM es <http://www.icmm.com/en-gb>
8. Los miembros del ICCM se comprometen a cumplir con 10 principios para contribuir al desarrollo sostenible, ver: ICCM, 2015: Sustainable Development Framework: ICCM Principles, London: ICCM, [http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/commitments/revise-2015\\_icmm-principles.pdf](http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/commitments/revise-2015_icmm-principles.pdf)
9. La página web de la IOGP es <http://www.iogp.org>
10. Con este fin, IOGP ha formado diferentes comités, como por ejemplo el de ambiente, que pretende poder responder a las demandas de diferentes actores, ver: IOGP, 2018: Our committees, <https://www.iogp.org/our-committees/>.
11. Wilson, Emma, Sarah Best, Emma Blackmore y Saula Espanova, 2016: Meaningful Community Engagement in the Extractive Industries, London: International Institute for Environment and Development, <http://pubs.iied.org/pdfs/16047IIED.pdf>.
12. Por un lado, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos fueron lanzados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, junto con empresas y algunas organizaciones no gubernamentales, en 2000, ver: Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, 19 de diciembre del 2000, [http://voluntaryprinciples.org/files/principios\\_voluntarios\\_espanol.pdf](http://voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf). Son los únicos estándares de Derechos Humanos que están diseñados exclusivamente para el sector extractivo. Actualmente, se han adherido 30 empresas a los principios, ver: Voluntary Principles, 2018: For companies, <http://www.voluntaryprinciples.org/for-companies/>. Por otro lado, en 2011 las Naciones Unidas publicaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que se aplican a los Estados y a todas las empresas transnacionales y de otro tipo, ver: Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas, 2011: Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos – Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar, remediar”, Nueva York / Ginebra: NNUU, [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_SP.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf).
13. Salmón, Elizabeth (coord.), 2016: La Progresiva Incorporación de las Empresas en la Lógica de los Derechos Humanos. Lima: Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDHPUCCP), p.17-18.
14. Diferentes estudios constatan los retos de una mayor vinculación de la economía local con el sector extractivo en los países de América Latina. Ver por ejemplo: Rudas, Guillermo, 2014: Notas sobre la minería de carbón a gran escala en Colombia, en: FES (Friedrich Ebert Stiftung): La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales, Análisis 1/2014, p. 5-22. Albriue, Ramiro, 2012: La macroeconomía de los recursos naturales en América Latina, en: Albriue, Ramiro; Andrés López, y Guillermo Rozenwurcel (coord.) Los Recursos Naturales como Palanca del Desarrollo en América Del Sur: ¿Ficción o Realidad? Montevideo: Red Mercosur de Investigaciones Económicas, p. 105-147.
15. Ed O'Keefe, director de Synergy Global, en una entrevista realizada por Sarah Busque, el 10 de diciembre de 2013, en: Borealis, 2013: Claves para mejorar las prácticas en las relaciones comunitarias, <https://www.boreal-is.com/es/blog/mejorar-relaciones-comunitarias/>.
16. Wilson 2016, cit. arriba.
17. Ibid.
18. ICCM, 2012: Mining's contribution to sustainable development, InBrief, Junio 2012). Ver también: López-Morales, José Satsumi, y otros, 2017: Strategies of social responsibility in Latin America: a content analysis in the extractive industry, en: Ad-Minister (Universidad Eafit), No. 31 julio a diciembre 2017, pp 115-135.
19. Oxfam Internacional y Social Capital Group (SCP), 2007: Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú.
20. Es importante diferenciar el gobierno nacional como poder ejecutivo de otros actores estatales como el poder judicial o el poder legislativo. El análisis a continuación se refiere al poder ejecutivo exceptuando cuando sea señalado de otra manera.
21. Ver Penfold, Michael y José Luis Curbelo, 2013: Hacia una nueva agenda en inversión extranjera directa. Tendencias y realidades en América Latina, Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 10 / 2013. Corporación Andina de Fomento (CAF).
22. Medina, Leandro, 2010: Efectos dinámicos de los precios de las materias primas en las posiciones fiscales de América Latina, CAF Working Papers No 2010/02.
23. Marczak, Jason y Peter Engelke, 2016: América Latina y el Caribe 2030: Escenarios futuros, Washington: BID, p. 21.
24. Datos de los diagnósticos de este estudio. Estas cifras no incluyen el empleo indirecto.
25. Monge, Carlos, 2017: Minería y marco institucionales en la región andina, Lima: NRGi / GIZ, p. 3-14.
26. Marczak 2016, cit. arr., p. 21
27. El único país de este estudio que no ha ratificado el convenio 169 es la República Dominicana.
28. En Argentina, no existe norma legal que regula el convenio. En México, la reforma constitucional de 2011 incorporó el Convenio 169 de la OIT a la constitución que está regulado mediante un protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), publicado mediante decreto, ver: Castillo Lara, Clara, 2017: La constitución mexicana y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en: Alegatos, No. 97, p. 575.



29. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
30. En Chile, hay un Ministerio de Minas y otro de Energía.
31. CONADI, 2018: <http://www.conadi.gob.cl/>
32. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
33. Salinas Alvarado, Carlos Eduardo, 2011: La consulta previa como requisito obligatorio dentro de trámites administrativos cuyo contenido pueda afectar en forma directa a comunidades indígenas y tribales en Colombia, consultado en: <https://revistas.ueh.ueh.edu.co/index.php/derest/article/view/3019/3055>.
34. Wilson, Emma, 2016, cit. arriba.
35. Ibid.
36. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
37. De hecho, "en muchos países de América Latina las consultas populares sobre minería se han convertido en un conflicto entre gobiernos nacionales, por un lado, y gobiernos locales y actores sociales", ver: Dietz, Kristina, 2017: Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. El caso de La Colosa, en: Colombia Internacional (93), 93-117, p. 96.
38. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), 2014: Pactos Igualdad – Hacia un futuro sostenible, p. 294 - 298.
39. Sanborn, A. Cynthia, y Juan Luis Dammert, 2013: Extracción de recursos naturales, desarrollo económico e inclusión social: Perú, Americas Quarterly, p. 26. Perry, Guillermo y Mauricio Olivera, 2009: El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en Colombia, CAF, documentos de trabajo 2009/06.
40. Mayores ingresos para los gobiernos locales no necesariamente se traducen en una mejora de la calidad de vida. Ver por ejemplo: Paredes Gonzales, Maritza Victoria, 2016: Los efectos del boom de las industrias extractivas en los indicadores sociales – países andinos, Natural Resource Governance Institute. Ministerio de Minería, Comisión Chilena de Cobre, 2013: Minería en Chile: impacto en regiones y desafíos para su desarrollo; Chile.
41. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
42. IIED, y otros (International Institute for Environment and Development, Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, World Business Council for Sustainable Development), 2002: Abriendo brecha: minería, minerales y desarrollo sustentable, IIED, p.224.
43. Respecto a las diversas necesidades de formación, ver por ejemplo: CEPAL / UNCTAD, 2003: Guía para la gestión de las autoridades locales de pueblos y distritos mineros de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, consultado en: <https://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/13966/lcr2114e.pdf>.
44. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
45. IIED, y otros, 2002, cit. arriba, p. 204.
46. Astorga, Eduardo, Francisco Carrillo, Mauricio Folchi, Magdalena García, Bernardo Grez, Bernardita McPhee, Claudia Sepúlveda, y Hans Stein, 2017: Resumen ejecutivo informe final proyecto: evaluación de los conflictos socioambientales de proyectos de gran tamaño con foco en agua y energía para el período 1998 – 2015, Santiago de Chile: Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), p. 12-13.
47. Watkins, Graham, Sven-Uwe Mueller, Hendrik Meller, María Cecilia Ramirez, Tomás Serebrisky, Andreas Georgoulas, 2017: Lecciones de cuatro décadas de conflicto en torno a los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, Washington: BID, p.20-1.
48. Davis, Rachel y Daniel Franks, 2014: Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector, Harvard: Harvard Kennedy School.
49. Ibid., p. 21.
50. Wilson, Alana y Miguel Cervantes, 2013: Survey of Mining Companies 2013: Vancouver: Fraser Institute.
51. Watkins et al 2017, cit arriba, p.5
52. Saade, Hazin, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú, Santiago de Chile CEPAL.
53. Franks et al. 2014, cit. arriba, p. 7576
54. Ibid
55. CEPAL: Argentina: Perfil Nacional Económico, [http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil\\_Nacional\\_Economico.html?pais=ARG&idioma=spanish](http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=ARG&idioma=spanish).
56. Elaborado sobre la base de datos del INDEC: [https://www.indec.gob.ar/nivel4\\_default.asp?id\\_tema\\_1=3&id\\_tema\\_2=2&id\\_tema\\_3=39](https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2&id_tema_3=39), según categoría: Minas y Canteras.
57. Ley N° 23.548 – Coparticipación Federal de Impuestos Período 2017 (1): <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/recursos/esquemas/ley23548.pdf>.
58. Cabe destacar que el sector de hidrocarburos tiene una mayor preponderancia en la cantidad de puestos de trabajo registrados con un 66,6% de los empleos registrados en 2016, en comparación con los 33,4% de los empleados de la industria minera metalífera para el mismo año. Elaborada sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): [http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/novedades/novedad\\_empleo.asp](http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/novedades/novedad_empleo.asp)
59. Jueguen, Francisco, 2017: El desempleo terminó 2016 en 7,6%, según el Indec, en La Nación, 16 de marzo de 2017, <https://www.lanacion.com.ar/1994231-el-desempleo-termino-2016-en-torno-al-76-segun-el-indec>. Según este artículo, la PEA fue de 18 millones de personas en 2016.
60. Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, [www.noalamina.org](http://www.noalamina.org).
61. Fundación Cambio Democrático, 2017: Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, Capital Federal, <http://cambiodemocratico.org/2017/02/07/plataforma-argentina-dialogo-para-uso-sustentable-recursos-naturales/>.
62. El Atlas de Justicia Ambiental es liderado por Leah Temper y Joan Martinez Alier y coordinado por Daniela Del Bene, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su propósito es recolectar historias de comunidades que luchan por la justicia ambiental en todo el mundo. Los datos son enviados desde los diferentes países por academia, ciudadanos preocupados, comités informales y organizaciones no gubernamentales. Un equipo de edición verifica los datos. Es importante mencionar que el tipo y el número de los conflictos registrados depende de la perspectiva de los actores que envían los datos por lo que no se trata de un dato objetivo. En este documento, se emplean los datos del atlas cuando no existe una cifra más confiable en el país, como es el caso de Argentina. Para mayor detalle de la metodología del Atlas, ver: Leah Temper, Daniela del Bene and Joan Martinez-Alier. 2015. Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. Journal of Political Ecology 22: 255-278. El link de acceso al Atlas de Justicia Ambiental es: <https://ejatlas.org/>.

63. CIPPEC, Fundación Vida Silvestre, y Consejo Empresarial Mendocino, 2015: Minería responsable para el crecimiento con equidad. El caso de Mendoza, <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1052.pdf>.
64. Chubut (Ley 5001, 2003), Tucumán (Ley 7879, 2007), Mendoza (Ley 7.722, 2007), La Pampa (Ley 2349, 2007), Córdoba (Ley 9526, 2008), San Luis (Ley 634, 2008), Tierra del Fuego (Ley 853, 2012)
65. Conflicto Famatina: desde 2004, se realizan en Famatina, provincia de La Rioja, acampes, marchas y cortes de ruta para impedir el paso a la mina a funcionarios del Gobierno y representantes de las empresas. Así la población ha logrado impedir los proyectos de compañías como Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y, el de la salteña Midais tras la pancarta de "El Famatina no se toca" Conflicto Esquel: en julio de 2002, la minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto ubicado a diez kilómetros de esta ciudad. Distintos grupos de vecinos comenzaron a organizarse. En octubre de 2002 confluyeron en una asamblea en la Escuela Normal y en noviembre nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Luego de varias marchas, el Concejo Deliberante aprobó una consulta popular. El 23 de marzo de 2003 el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó la explotación del yacimiento de oro y plata. Si bien la consulta no era vinculante los resultados hicieron que se suspendiera la ejecución del proyecto.
66. Velarde Ponce de León, Claudia, 2018: Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina, <https://aida-americas.org/es/blog/defendiendo-comunidades-del-avance-del-fracking-en-argentina>.
67. Se han identificado una serie de otras prácticas que no han podido ser validadas en el marco de este estudio. Estas experiencias se encuentran en el anexo 3.
68. La investigación de campo concluyó en 2017, por lo que se puede asegurar la duración de la buena práctica solo hasta este año, lo que no excluye la posibilidad de que sea vigente en el futuro. Esta observación es válida para todas las buenas prácticas.
69. Este espacio es accesible a la comunidad y ésta ha planteado dentro del mismo problemáticas a las cuales se les ha buscado soluciones (falta de leña - donación, falta de capacitación minera - aula móvil, falta de comunicación - wifi libre para toda la comunidad)
70. La innovación se refiere a prácticas que fueron novedosas al momento de su validación en el país respectivo.
71. Cada buena práctica fue evaluada según las dimensiones participación, pertinencia y sostenibilidad en base a indicadores diseñados anteriormente. Para mayor información referirse al marco conceptual y metodológico, 4.3. (anexo 2).
72. Todas las buenas prácticas que incluyen el diagnóstico fueron analizados según la consideración de los siguientes enfoques: enfoque participativo, enfoque de regulación de derechos y obligaciones; enfoque de desarrollo sostenible; enfoque de diversidad; enfoque de igualdad de género; enfoque de transformación de conflictos. Las definiciones se pueden revisar en el marco conceptual (anexo 2). Si los enfoques no son mencionados en el análisis de la buena práctica, significa que no se han encontrado elementos que indican su inclusión en la implementación de la buena práctica.
73. Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration - an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario, p. 194.
74. Ibid.
75. Información suministrada por PAE.
76. Cámara Argentina de Empresarios Mineros: HMS, <http://www.caem.com.ar/hms/>.
77. Solo a modo de ejemplo, puede mencionarse a provincia de La Rioja con su conflicto en Famatina antes mencionado y la postura del gobernador de la provincia. DyN, 2011, Beder Herrera les pidió a los ambientalistas que se "dejen de joder" con la minería, Clarín Noticias, 31/05/2011, [https://www.clarin.com/medio\\_ambiente/Beder-Herrera-ambientalistas-joder-mineria\\_Q\\_Skl-TiWawXx.html](https://www.clarin.com/medio_ambiente/Beder-Herrera-ambientalistas-joder-mineria_Q_Skl-TiWawXx.html).
78. Una organización importante es Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). FARN ha realizado diferentes estudios, entre otros sobre la explotación de Litio. Respecto a las actividades extractivas sostienen: Los efectos sociales y ambientales de este tipo de actividades son demoledores: destrucción ecológica, pérdida de bosques naturales, deterioro del suelo, contaminación por agroquímicos, desplazamiento de comunidades locales, nula generación de empleo de calidad e incluso violación de derechos, entre otros. Desde FARN afirmamos que no existen políticas extractivas que sean amigables con la sociedad, ni con el ambiente (<https://farn.org.ar/actividades-extractivas>).
79. Un ejemplo es la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, un movimiento vecinal que surgió en la localidad de Esquel, Provincia de Chubut y se extendió a otras localidades del país. Según su página WEB, ya se encuentran en 15 lugares del país. No posee una organización formal con cargos y funciones. Sus acciones y su presencia como grupo opositor a la minería son muy fuertes en Argentina. Para mayor información, véase: Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, cit. arr.
80. Universidad Nacional de San Martín, <http://www.unsam.edu.ar>
81. Puede mencionarse como ejemplo, las Universidades de San Martín y Tres de Febrero que realizaron durante varios años capacitaciones a los docentes de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia de la mina Bajo La Alumbrera
82. Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación, 2015: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Tierras y registro nacional de comunidades indígenas, <https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/08/6.-INAI-Tierras-y-registro-nacional-de-comunidades-indigenas.pdf>
83. Por ejemplo, referente a las instancias de participación en el marco del Informe de Impacto Ambiental. Ejemplos son: Ley N° 123 de Evaluación del Impacto Ambiental de Buenos Aires, última modificación publicada el 18/05/2012. Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, provincia de Santa Cruz, publicada el 21/08/2003. Ley 10.208. Política Ambiental Provincial (Córdoba), publicada el 27/06/2014.
84. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016: Informe del estado de ambiente 2016, Buenos Aires. [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mayds\\_informe\\_estado\\_ambiente\\_2016\\_baja\\_1\\_0.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mayds_informe_estado_ambiente_2016_baja_1_0.pdf).
85. Covo, María Julia, 2013: Derecho de minería y energía - El principio de congruencia de la ley general del ambiente en el Derecho Minero, en: Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; año 10, no. 43, p. 151-160; p. 153
86. La producción de petróleo y gas es marginal en Chile y la autora no encontró cifras macroeconómicas que incluyen el petróleo. La producción petrolera se concentra en ENAP, una empresa del Estado, cuyo objeto es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Para la producción de Gas Natural existen 10 empresas agrupadas en un gremio. El reporte de sustentabilidad de ENAP señala que la producción de petróleo en Chile, (Región de Magallanes) alcanzó 987 millones de barriles para 2016; en tanto, la producción de gas natural en Chile (Magallanes), alcanzó a 1.004 millones de metros cúbicos estándar (5.909.500 barriles equivalentes). Las exportaciones de ENAP llegaron a 0,42 millones de metros cúbicos de productos derivados del petróleo, lo que equivale al 3,8% de la producción total de sus refinerías.

87. Consejo Minero, 2018: Cifras actualizadas de la minería, <http://dev.consejominero.cl/wp-content/uploads/2018/03/Cifras-actualizadas-de-la-miner%C3%ADa-Marzo-2018.pdf>.
88. Comisión Nacional de Productividad 2016: Productividad de la Gran Minería el Cobre, <http://www.comisiondeproductividad.cl/productividad-de-la-gran-mineria-del-cobre/>
89. Consejo Minero, 2018, cit. arr.
90. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
91. Consultado en: Sociedad Nacional de Minería, El nivel de empleo en la minería es el más bajo de los últimos siete años, <http://www.sonami.cl/site/noticias/el-nivel-de-empleo-en-la-mineria-es-el-mas-bajo-de-los-ultimos-siete-anos/>.
92. Comisión Chilena del Cobre, 2017: Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Metales 1997-2016, Santiago de Chile, <https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/17/Anuario-%20avance7-10-7-17.pdf>.
93. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
94. -Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015: Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, Santiago de Chile, <http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/989/libro.pdf?sequence=5>.
95. Comisión Minería y Desarrollo de Chile Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014: Minería. Una Plataforma de futuro para Chile, [http://valorminero.cl/site/docs/2017/mineria-una-plataforma\\_futuro\\_para\\_chile.pdf](http://valorminero.cl/site/docs/2017/mineria-una-plataforma_futuro_para_chile.pdf).
96. Hallazgos Mesa de Trabajo Industrias extractivas realizada el 18 de agosto 2017 en Santiago de Chile para este estudio.
97. Alianza Valor Minero, Seminario Valor Minero Inversión y Diálogo para el Desarrollo, [http://valorminero.cl/site/docs/2017/informe\\_seminario\\_inversion\\_dialogo\\_desarrollo.pdf](http://valorminero.cl/site/docs/2017/informe_seminario_inversion_dialogo_desarrollo.pdf).
98. Informe Sistematización Caracterización Socio-Ambiental Proyecto Acuerdo Territorial Para El Desarrollo - Localidad De Sierra Gorda. Agencia de Cambio Climático- Alianza Valor Minero septiembre 2017.
99. Ibid.
100. No se cuenta con información de los montos de inversión social de las empresas en Sierra Gorda.
101. Alianza Valor Minero es una institución público-privada que reúne a múltiples actores con el objetivo de generar las condiciones para transformar a la minería chilena en una plataforma de desarrollo virtuosa, inclusiva y sostenible, Valor Minero, <http://www.valorminero.cl/valor-minero/>
102. Chile Transparente, Transparencia Caimanes, Santiago de Chile, <http://www.chiletransparente.cl/project/transparencia-caimanes/>.
103. Nueva Unión, 2017: Corproa elige a Nueva Unión como "Empresa Destacada del Año", <http://www.nuevaunion.cl/noticias/2017/corproa-elige-a-nuevaunion-como-empresa-destacada-del-ano>.
104. Ibid.
105. Política de Pueblos Indígenas Nueva Unión. Consultada en : Nueva Unión, Sustentabilidad, <http://www.nuevaunion.cl/sustentabilidad>.
106. Desarrollo Futuro de la minería en la zona Central. Diagnóstico y recomendaciones para la sostenibilidad. Alianza Valor Minero. Noviembre 2017
107. Otras iniciativas entre diferentes sectores son Consejo Nacional de la Innovación para el Desarrollo, Consejo Consultivo para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Grupo de Exploraciones Sustentables, Grupo de Trabajo Agenda 2030, Mesa de trabajo Mujer, Minería y buenas prácticas del ministerio de Minería.
108. Alianza Valor Minero, cit. arr.
109. Alianza Valor Minero, cit. arr.
110. Ministerio de Minería, Misión Institucional, <http://www.minmineria.gob.cl/mision-institucional/>.
111. Mapa de las organizaciones de la sociedad Civil 2015. Centro de Políticas Públicas Universidad Católica (2016).
112. Villalobos, Fernanda, 2017: Ambientalistas y rechazo a Dominga: Quiénes gobiernan "están tomando las decisiones correctas", Santiago de Chile, <http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html>.
113. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena , Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas , <http://www.conadi.gob.cl/registro-de-comunidades-y-asociaciones-indigenas>.
114. Portal Minero, 2014: Corte rechaza recursos contra proyecto minero El Morro, <http://www.portalminero.com/display/NOT/2014/04/29/Corte+rechaza+recursos+contra+proyecto+minero+El+Morro?showComments=true&showCommentArea=true>.
115. OIT (2014) Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión. Matías Abogabir. ES ESTO UNA FUENTE DE LIBRO O DE PÁGINA WEB? POR FAVOR INCLUYA TODOS LOS DATOS SEGÚN EL FORMATO ENVIADO.
116. Delamaza, Gonzalo, 2011: Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Revista de la Universidad Bolivariana, volumen 10, N°30, 2011, pp. 45-75.
117. Ministerio de Desarrollo Social, 2013: Decreto Supremo N° 66 .
118. OIT (2014) Matías Abogabir. Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión.
119. DANE, 2016: Atlas Estadístico de Colombia, Bogotá, <http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/>.
120. Incluye carbón, níquel y petróleo y sus derivados de las exportaciones tradicionales del país para el 2016. Ibid.
121. No existe información oficial para establecer una repartición de ingresos a nivel nacional o central.
122. De acuerdo con las cifras del DANE, para 2016 el total de la población ocupada es de 22,8 millones. La definición de la población ocupada incluye personas en una de las siguientes situaciones: 1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. 2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.
123. Observatorio de las industrias extractivas en Colombia, 2015: El sector extractivo en Colombia 2014, Bogotá: Foro Nacional por Colombia, y otros, [http://media.wix.com/ugd/ef61f6\\_3c07a995db4a4f5b98b151e3a370e1c0.pdf](http://media.wix.com/ugd/ef61f6_3c07a995db4a4f5b98b151e3a370e1c0.pdf).
124. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr
125. Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), 2017: Tendencias de la Conflictividad Socioambiental en América Latina y Propuestas para su Abordaje, Quito, [https://www.flla.net/publicaciones/doc\\_details/320-tendencias-de-la-conflictividad-socioambiental-en-am%C3%A9rica-latina-y-propuestas-para-su-abordaje.html](https://www.flla.net/publicaciones/doc_details/320-tendencias-de-la-conflictividad-socioambiental-en-am%C3%A9rica-latina-y-propuestas-para-su-abordaje.html).
126. Fundación Foro Nacional por Colombia, 2017: La agenda de la sociedad civil frente a las industrias extractivas en Colombia, Bogotá: Foro Nacional por Colombia y Natural Resource Governance Institute, <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/reporte-colombia.pdf>.



127. La Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 ("PND") clasifica los tipos de minería en minería de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería.
128. Fundación Avina y Gestión Ambiental Estratégica, 2012. Elementos diagnósticos para una caracterización de la minería en Colombia. Bogotá, Colombia. Mesa de Diálogo permanente de Minería en Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?
129. Ley 34 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
130. Morales, Lorenzo, 2017. La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible, Bogotá: Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes, [http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/envt-colombia-esp\\_web-res\\_final-for-email.pdf](http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/envt-colombia-esp_web-res_final-for-email.pdf)
131. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Bogotá, <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-II-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>.
132. Morales 2017, cit arr.
133. Jiménez, Carlos Mario, 2017: En 6.3 % aumentó producción de carbón en el Cesar, <http://elpilon.com.co/en-6-3-aumento-produccion-de-carbon-en-el-cesar/>.
134. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpocesar es la autoridad encargada por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país.
135. Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
136. Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica. Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Bogotá Colombia. En bibliografía consta el link: Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Disponible en: <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/-NO-SE-PUDE-ACCEDER-A-ESTA-PAGINA-FORBIDDEN>
137. <?> Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. Bogotá, Colombia. En bibliografía consta el link: Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/-NO-SE-PUDE-ACCEDER-A-ESTA-PAGINA-FORBIDDEN>
138. <?> Ministerio de Minas y Energía: Relacionamento Territorial, <https://www.minminas.gov.co/relacionamiento-territorial>.
139. <?> La Resolución 0322 de 2015 adopta el manual específico de funciones y competencias del Ministerio del Interior.
140. <?> La Ley 1444 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como organismo técnico con autonomía administrativa y financiera -sin personería jurídica- para el estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales. La ANLA debe asegurar que los proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento cumplan con la normativa ambiental (Decreto 3573 de 2011).
141. <?> Departamento Nacional de Planeación, 2016: Evaluación de operaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que mida la capacidad con la que cuentan para lograr sus objetivos y proponer acciones de mejora para el fortalecimiento integral de las mismas y el mejoramiento de la gestión ambiental en el país, Bogotá, [https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/CAR\\_Producto\\_4\\_Informe\\_Resultados\\_v20161128.pdf](https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/CAR_Producto_4_Informe_Resultados_v20161128.pdf)
142. <?> Ministerio de Ambiente, 2013: Decreto 2613 de 2013 por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa, [http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2013/dec\\_2613\\_2013.pdf](http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2013/dec_2613_2013.pdf).
143. <?> Lloreda Francisco, presidente ACP. Septiembre 2017. III Congreso de la Asociación Colombiana de Productores de Petróleo ACP. Bogotá, Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
144. La fuente de todas las cifras de 2016 es: PEMEX, 2016: Anuario Estadístico 2016, México, pp. 5-6 y 15-16, <http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/anuario-estadistico-2016.pdf>. La fuente del valor de 2010 es: González, Ixel, 2015: Petróleo aporta menos al crecimiento del PIB en 2014, México, <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleo-aporta-menos-al-del-pib-en-2014.html>.
145. Los datos nacionales estadísticos no desglosan por industria de hidrocarburos.
146. Centro Mexicano para la Filantropía, 2017: Número de organizaciones en cada estado por figura legal, <http://200.57.117.52/Directorio2/Estadisticas/frmoOrganizacionesFiguraLegal.aspx>.
147. El amparo en un amplio sentido se revela como un conjunto de actos procesales o procesos que culminan en resolución judicial o sentencia, que constituye su causa final común, y en un sentido estricto, como un derecho, como una potestad que tiene la persona para hacer que se repare en su favor cualquier violación a sus garantías individuales. La Constitución mexicana de 1917 establece como órgano de control constitucional al Poder Judicial Federal, facultándolo para modificar los actos de autoridades o leyes violatorias de garantías individuales, y dispone que a través del amparo pueden impugnarse actos o leyes de cualquiera de los tres Poderes, creando así el juicio de amparo en contra, también, de resoluciones judiciales. Consultado en: Ensayos Universitarios GMORR, 2009: Juicio de amparo en México, <https://www.gestiopolis.com/juicio-de-amparo-en-mexico/>
148. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
149. Enciso, Angélica, 2016: Hay en México 420 conflictos socioambientales: Investigador, <http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/sociedad/038nIsoc>.
150. David Shields, analista, periodista y consultor de la industria energética. Director General del proyecto Energía a Debate; y Jorge Arriaga, PhD en Desarrollo Regional por la Universidad de la Sorbona en París; fue Subgerente de Atención a Organizaciones Sociales en PEMEX y actualmente es consultor para la industria energética.

151. "En primer lugar, la ASF (Auditoría Superior de la Federación – SC) señala que existen vacíos normativos, toda vez que los Lineamientos en materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos no establecen líneas claras sobre el seguimiento de la aplicación de los recursos y bienes. Lo anterior deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios", en: De la Fuente López, Aroa, 2017: Donativos y Donaciones de PEMEX: Deficiencias e Irregularidades, México, pp.2-3, <http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ASF-Donativosydonaciones.pdf>.
152. Morris, Stephen, 1992: Corrupción y Política en el México Contemporáneo, México, pp. 76-79, [https://books.google.com.mx/books?id=H1\\_dodEHuloC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=paternalismo+en+mexico+pemex&source=bl&ots=Vrtsu6fuc0&sig=\\_oDNsdtrNbJW16XNi7jQB9VFM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTqMkt5\\_rYAhWQ7VMKHdw1CYyQ6AEIzDAJ#v=onepage&q=paternalismo%20en%20mexico%20pemex&f=false](https://books.google.com.mx/books?id=H1_dodEHuloC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=paternalismo+en+mexico+pemex&source=bl&ots=Vrtsu6fuc0&sig=_oDNsdtrNbJW16XNi7jQB9VFM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTqMkt5_rYAhWQ7VMKHdw1CYyQ6AEIzDAJ#v=onepage&q=paternalismo%20en%20mexico%20pemex&f=false).
153. Diario Oficial de la Federación, 2014: Ley de Hidrocarburos, México, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014).
154. Entrevistas con académicos y académicas expertos en energía.
155. Entrevistas con actores sociales en el marco de este diagnóstico.
156. Secretaría de Energía, 2016: 4º Informe de Labores de la Secretaría de Energía 2015-2016, México, pp. 69, [http://transparencia.energia.gob.mx/rendicion\\_cuentas/archivos/SENER-4oInformeLabores.pdf](http://transparencia.energia.gob.mx/rendicion_cuentas/archivos/SENER-4oInformeLabores.pdf).
157. A noviembre del 2017, el gasoducto aún tenía parada la operación en el tramo Guaymas- El Oro. Consultado en: Zúñiga, Norma, 2017: Pide CFE liberar ducto Guaymas-El Oro, México, <http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1262784&md5=0164b194d21007299490c50495577918&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>.
158. Resolutivo de la consulta previa, libre e informada del gasoducto Sonora. Consultado en: Gob.mx, 2015: Resolutivo de la CPLI a la Tribu Yaqui, México, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194673/Resolutivo\\_de\\_la\\_CPLI\\_a\\_la\\_Tribu\\_Yaqui.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194673/Resolutivo_de_la_CPLI_a_la_Tribu_Yaqui.pdf).
159. Comentarios al diagnóstico del Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía.
160. Tribunales federales ordenaron a los tres órganos de gobierno frenar el gasoducto. Consultado en: Escobar, Amalia, 2017: Tribunal ordena a secretarías frenar obras de gasoducto, México, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/27/tribunal-ordena-secretarias-frenar-obras-de-gasoducto>.
161. Las entrevistas, con los diferentes actores en cada proyecto y con funcionarios de organizaciones de la sociedad civil permiten realizar esta aseveración, que de ninguna manera pretende ser generalizada.
162. Es decir, las formas históricas clientelares han tenido que cambiar por formas basadas en acuerdos internacionales para llevar a cabo la consulta indígena, por ejemplo, en donde la información previa y la consulta son un principio que se debe respetar.
163. Empresa filial de PEMEX que financia el proyecto.
164. El Plan de Gestión Social se incluye en los lineamientos que establece la Secretaría de Energía (SENER) para la evaluación de impacto social contemplada en la Ley de Hidrocarburos. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016: Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el sector energético, [www.cofemeresimr.gob.mx/expediente/14565/mir/34590/archivo/948300](http://www.cofemeresimr.gob.mx/expediente/14565/mir/34590/archivo/948300).
165. En los lineamientos de la Evaluación de Impacto Social (Evis), uno de los requisitos es que la empresa debe presentar su Plan de Gestión Social dentro de la Evis.
166. Informe de labores de la Secretaría de Energía, Marco Legal y Participación en EITI y otros espacios regionales y bilaterales. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016, cit. arr., p. 5 y p. 160.
167. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_150917.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf).
- 168.
169. Se retoma esta ley en el reporte, ya que el gas natural es un insumo que va en crecimiento para la generación de energía eléctrica. Las atribuciones son claras para el momento de la extracción y transporte del gas y cada instancia reguladora.
170. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2018, México, <https://www.gob.mx/sgm>. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018: Censos Económicos, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), México, <http://www.beta.inegi.org.mx/app/saic/>.
171. Estas cifras no incluyen información de las empresas prestadoras de servicios y tampoco incorpora información de la minería artesanal y de pequeña escala.
172. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 2017: Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, México, <https://www.gob.mx/sedatu>.
173. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
174. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018: Informe Anual 2018, México.
175. Saade Myriam, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los Casos de Colombia, México y el Perú. Santiago de Chile, [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5369/LCL3706\\_es.pdf;jsessionid=C8F9D8F34833870162349695B7F0FE7F?sequence=1](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5369/LCL3706_es.pdf;jsessionid=C8F9D8F34833870162349695B7F0FE7F?sequence=1).
176. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
177. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2013: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México.
178. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México.
179. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2017: Informe Anual 2017. México.
180. CCC forma parte de una red de organizaciones denominada Partners.
181. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
182. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018, cit. arr.

183. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 1990: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, México, <http://www.contactopyme.gob.mx/mercados/info/secofi.html>.  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
184. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
185. Los pasivos ambientales fueron el resultado de las operaciones de otras empresas entre las que se encuentran ASARCO, la cual posteriormente vendió sus concesiones a Grupo México. Durante la operación de estas empresas, México carecía de regulación ambiental, por lo que la remediación de los pasivos ambientales no era una exigencia para las empresas.
186. Un total de 490.000 m<sup>3</sup> de suelo vegetal recuperado y almacenado para acciones de restauración.
187. Este proyecto tendrá un costo de más de 2 millones de dólares, ya que se requiere retirar y encapsular los contaminantes que fueron depositados por las otras empresas como parte del proceso de remediación. Es relevante destacar que New Gold, como estrategia para garantizar y cumplir con los compromisos definidos como parte de su plan participativo de cierre ambiental, cuenta con una fianza pagada ante la tesorería de la Federación por casi 30 millones de dólares que respalda el 100% del cierre biofísico y socioeconómico. De manera que el "Patio Paseo Victoria" es hoy en día una de las obras de recuperación de espacios urbanos más importantes en la entidad, así como un ejemplo palpable del legado que New Gold Minera San Xavier dejará para las generaciones actuales y venideras en este municipio.
188. Los "Pueblos Mágicos" es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en México desde el año 2001, para promover la oferta turística en el país, en sitios en donde sus habitantes y gobiernos locales han logrado proteger su riqueza cultural, por lo que son reconocidos como sitios que tienen grandes atributos históricos-culturales. En estos lugares se promocionan las artesanías, festividades, gastronomía del lugar, así como productos turísticos basados en la aventura, senderismo o ecoturismo.
189. New Gold Minería San Xavier S.A de C.V Cerro de San Pedro, 2015: Reporte de Sustentabilidad 2015, México, [http://s1.q4cdn.com/240714812/files/documents\\_sustainability/Reporte-de-Sustentabilidad-2015-MSX.pdf](http://s1.q4cdn.com/240714812/files/documents_sustainability/Reporte-de-Sustentabilidad-2015-MSX.pdf).
190. Incluye Sonora (Nacozari, Esqueda, Guaymas y Cananea); Coahuila (Nueva Rosita); San Luis Potosí (Charcas y San Luis Potosí); Chihuahua (Santa Bárbara y Santa Eulalia); Michoacán (Angangueo); Zacatecas (Sombrerete); Guerrero (Taxco); Guanajuato (León); Oaxaca (Juchitán); Campeche (Ciudad del Carmen), y Baja California Sur (Guerrero Negro).
191. *Industria*: los representantes del sector industrial incluyen a Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) y la Cámara Minera de México (CAMIMEX). Estas organizaciones agrupan a las principales empresas del sector de hidrocarburos en México y a las empresas mineras que generan aproximadamente 90% de la producción minera del país. Sociedad civil: los representantes de la sociedad civil fueron elegidas por un grupo de aproximadamente 40 OSC, que fueron invitadas e informadas en talleres nacionales y regionales sobre la intención del gobierno de adherirse a este estándar por un grupo impulsor conformado por Transparencia Mexicana, FUNDAR y PODER. Se eligió un grupo de representantes y suplentes que está conformado por: PODER, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSTA), Transparencia Mexicana (TM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. En la actualidad, ALCOSTA no forma parte de este grupo de representantes y suplentes. El gobierno conformó un Grupo Intersecretarial (GI) integrado por medio de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) (por medio de la Subsecretaría de Minería) y la Subsecretaría de Hidrocarburos (SENER). Actualmente, la responsabilidad de presidir el GI está a cargo de la Subsecretaría de Minería.
192. USAID, Banco Mundial, Natural Resource Governance Institute, GIZ, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada Británica.
193. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2016: Informe Anual 2016, México.  
Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
194. Secretaría de Economía (SE), 2016, cit. arr.
195. (1) Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) (Nuevo León), (2) Universidad Veracruzana (Veracruz), (3) Universidad Autónoma de Coahuila (Coahuila), (4) Universidad de Colima (Colima), (5) Universidad de Guanajuato (Guanajuato), (6) Universidad Autónoma del Estado de México (México), (7) Benemérita Universidad de Puebla (Puebla), (8) Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Chiapas), (9) Universidad de Sonora (Sonora), (10) Universidad Autónoma de Puebla (Puebla), (11) Universidad Estatal de Sonora (Sonora), (12) Universidad Politécnica Juvenino Rosas (Guanajuato), (13) Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (Hidalgo), (14) Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Zacatecas), (15) Instituto Tecnológico de Chihuahua (Chihuahua), (16) Instituto Tecnológico de Morelia (Morelia), y (17) Instituto Tecnológico de Querétaro (Querétaro).
196. Unversia México, 2016: Licenciaturas en Ingeniería en Minas, <http://www.universia.net.mx/estudios/ugto/licenciatura-ingenieria-minas/st/152715>.
197. Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Transparencia Mexicana (TM), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSA), los Socios México/Centro de Colaboración Cívica (CCC), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, CartoCritica, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Amigos del Río San Rodrigo, Oxfam, The Nature Conservancy, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Fundación Heinrich Böll, Fundación Desarrollo Sustentable A.C., el Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar) y el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (CIIDES).
198. Saade Myriam, 2013, cit. arr.  
Temper Leah, del Bene Daniela y Joan Martínez-Alier, 2015, cit. arr.  
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), 2018, cit. arr.  
Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014, cit. arr.  
Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
199. Díaz, Luis y Morones Guadalupe, 2001: Inversión extranjera; derecho mexicano y derecho internacional, Edición 01, México: Themis.
200. Poder Judicial Federal, 2016, cit. arr.
201. Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2017: Anuario Minero 2016, Lima, <https://es.scribd.com/document/351009672/ANUARIO-MINERO-2016-pdf>.

202. EY, 2018: Informe Final Sexto Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas (Sexto Estudio de Conciliación Nacional – EITI Perú) Períodos 2015 y 2016. Consultoría para la Comisión Multisectorial Permanente del EITI Perú, Lima, [http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/VI\\_INT\\_2015\\_2016%20EITI\\_%20PERU.pdf](http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/VI_INT_2015_2016%20EITI_%20PERU.pdf).
203. Ministerio de Energía y Minas, 2017: Anuario Minero 2016, Lima, p. 118.
204. Lamentablemente no existen cifras accesibles para el sector hidrocarburos.
205. Defensoría del Pueblo, 2018: La Defensoría del Pueblo registró 169 conflictos sociales a diciembre de 2017, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=19531>.  
Defensoría del Pueblo, 2017: Reporte de Conflictos Sociales N.º 166, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2018/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-166---Diciembre-2017.pdf>.
206. Lanegra Iván, 2016: ¿Qué está en juego con la elección del Defensor del Pueblo?, Lima, <http://ojo-publico.com/294/que-esta-en-juego-con-la-eleccion-del-defensor-del-pueblo>.
207. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
208. Glave Manuel y Kuramoto Juana, 2007: La minería peruana: Lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber, Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Grade, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, pp. 135-181.
209. Baca Epifanio, 2015: Estudio sobre Marco Normativo Minero en Perú Lima, <http://propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Estudio%20EBaca.pdf>.
210. Participaron el Gobierno regional y Municipalidad Provincial de Arequipa, diez municipalidades distritales, la asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa, la Federación Departamental de Trabajadores, el COFREN, el FREDICON, CONREDE, Comité de Gestión Ambiental de Uchumayo.
211. ONU Mujeres, La mujer y el medio ambiente, <http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/environment>.
212. Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, Por una Minería con Responsabilidad Social y Ambiental en el Perú Un acuerdo fruto del diálogo y las lecciones aprendidas, <http://www.grupodedialogo.org.pe/wp-content/uploads/2015/03/Visión-Minería-2021.pdf>.
213. Cooperación, 2017: Actualidad Minera del Perú, No. 222, <http://cooperacion.org.pe/wp-content/uploads/2017/12/AMP-diciembre-2017.pdf>.
214. Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de los Conflictos y la Gobernabilidad, 2017: Competencias en la atención de conflictos sociales, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=6>.
215. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 2018: Poder Ejecutivo presenta Proyecto de Ley que pretende modificar Ley Orgánica de Hidrocarburos favoreciendo al sector privado y en detrimento de los pueblos indígenas y el medio ambiente, <http://www.dar.org.pe/noticias/poder-ejecutivo-presenta-proyecto-de-ley-que-pretende-modificar-ley-organica-de-hidrocarburos-favoreciendo-al-sector-privado-y-en-detrimento-de-los-pueblos-indigenas-y-el-medio-ambiente/>.  
Scurrah Martin y Chaparro Anahí, 2014: La participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos indígenas: Políticas Públicas para un nuevo rol de la minería y los hidrocarburos en el Perú, Lima, <http://www.redge.org.pe/sites/default/files/La%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20y%20la%20consulta%20previa%20en%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20-%20M.%20Scurrah%20y%20A.%20Chaparro.pdf>.
216. CEPAL y OCDE 2016: Evaluaciones del desempeño ambiental Perú. Aspectos destacados y recomendaciones, Santiago, <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40171-evaluaciones-desempeno-ambiental-peru-2016-aspectos-destacados-recomendaciones>.
217. EY, 2018, cit. arr.
218. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 2018: La Participación Ciudadana en la Actividad de Hidrocarburos, [http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com\\_content&view=article&id=506&Itemid=3556](http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=3556).
219. Milano Flavia y Sanhueza Andrea, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas, Washington, <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7499/Consultas-publicas-con-sociedad-civil-Guias-para-agencias-ejecutoras-publicas-y-privadas.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
220. Ministerio de Cultura, 2015: Derecho a la Consulta Previa Guía Metodológica para la Facilitación de Procesos de Consulta Previa, Lima, <http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Guia-Metodologica-para-la-Facilitacion-de-Procesos-de-Consulta-Previa.pdf>.
221. Con respecto a los proveedores para la minería, el país no cuenta con datos registrados
222. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Real, Santo Domingo, [https://www.bancentral.gov.do/estadisticas\\_economicas/real/](https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/).
223. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Externo, Santo Domingo, [https://www.bancentral.gov.do/estadisticas\\_economicas/externo/](https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/externo/).
224. Datos levantados para este diagnóstico por la consultora apoyados en el Banco Central de la Republica Dominicana, encuestas directas a las empresas metálicas, y el Ministerio de Energía y Minas.
225. El dueño de Falcondo es American Nickel.
226. Ley 176-07
227. Ley 200-04
228. Thomen Ginebra, Cristina, 2012: Informe País - Trabajo Final Diplomatura Industria Extractiva, Vigilancia y Desarrollo Sostenible, Julio 2012, Santo Domingo, República Dominicana.
229. Dirección General de Impuestos Internos, 2015: Ranking de Empresas 2015, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/Ranking%20de%20Empresas%202015.pdf>.
230. Dirección General de Impuestos Internos, 2016: Ranking de Empresas 2016, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/RankingEmpresas2016.pdf>.
231. Salvo los proyectos de la minera Falcondo, realizados a través de su rama de responsabilidad social Fundación Falcondo que iniciaron en 1989.
232. En 2007 PVDC empezó sus programas de responsabilidad social.
233. Barrick Pueblo Viejo: Estudio demuestra la sostenibilidad de los proyectos sociales implementados por Barrick Pueblo Viejo, Santo Domingo D.N, <http://barrickpuebloviejo.do/noticias/estudio-demuestra-la-sostenibilidad-de-los-proyectos-sociales/2016-10-13/144111.html>.
234. FOMISAR Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros, <http://www.fomisar.com/>.



235. Oro Información, 2017: Las cinco mayores minas de oro del mundo. <https://www.oroinformacion.com/es/OroInformacion/metales/487/Las-cinco-mayores-minas-de-oro-del-mundo.htm>.
236. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
237. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
238. Los resultados a favor fueron con 86,22% en Maimón, 98,66% en Cotuí y 98,78% en Fantino (véase Planes de Desarrollo publicados por los ayuntamientos de Maimón, Cotuí y Fantino).
239. Son los órganos de participación ciudadana directamente relacionados con la planificación municipal, ver: Malagón, Angela, y Rosa Arlene María, 2012: Guía para la Creación del Consejo Económico y Social Municipal, Santiago de los Caballeros: Federación Dominicana de Municipios, <http://fedomu.org.do/wp-content/uploads/2016/05/Guia-CES-FEDOMU-final.pdf>.
240. Bonilla, Teófilo, 2013: Diputados aprobaron renegociación de contrato con Barrick Gold, <http://elnacional.com.do/diputados-aprobaron-renegociacion-de-contrato-con-barrick-gold/>.
241. Barrick Pueblo Viejo, Responsabilidad Social Corporativa, <http://barrickpuebloviejo.do/responsabilidad-social/responsabilidad-social-corporativa/2016-10-13/122340.html>.
242. El Dinero, 2015: El lado amable de Barrick Pueblo Viejo - La minera dice que su accionar ha sido positivo en la provincia Sánchez Ramírez, <https://www.eldinero.com.do/10147/el-lado-amable-de-barrick-pueblo-viejo/>.
243. Al Momento, 2015: Barrick Pueblo Viejo inicia programa "una Computadora por Niño" en RD, Santo Domingo, <http://almomento.net/barrick-pueblo-viejo-inicia-programa-una-computadora-por-nino-en-rd/>.
244. El Veedor Digital, 2015: ENDA y la Barrick extienden proyecto para reforestar Piedra Blanca-Los Haitises, Santo Domingo, <http://elveedordigital.com/provincias/item/6431-enda-y-la-barrick-extienden-proyecto-para-reforestar-piedra-blanca-los-haitises>.
245. Álvarez, Yulissa, 2017: La piscicultura, un atractivo ecoturístico de Cotuí La actividad, apoyada por la Barrick, impulsa el desarrollo de la provincia Juan Sánchez Ramírez, Cotuí, <https://www.eldinero.com.do/40640/la-piscicultura-un-atractivo-ecoturistico-de-cotui/>.
246. Listín Diario, 2017: Inician trabajos de electrificación, Sánchez Ramírez, <https://www.listindiario.com/economia/2017/10/05/485133/inician-trabajos-de-electrificacion>.
247. Véase: Buena Práctica: 2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales
248. RD\$2'000.000,00, tasa de cambio del Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) para diciembre 2017.
249. Basado en cálculos estimados de la incubadora por efectos del aumento de empleo producto de las mineras y del aumento estimado de población calculado por The World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos a un 1,7% anual de incremento de población. El link de acceso a The World Factbook es: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
250. Matos, Heidi, 2012: Más de 4 millones de pesos para microempresarios de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, Cotuí, <http://eljacaguero.com/mas-de-4-millones-de-pesos-para-microempresarios-de-sanchez-ramirez-y-monseñor-nouel/>.
251. Acento, 2016: INFOTEP y Fundación Rica entregan Premio Nacional a la Excelencia 2016, Santo Domingo, <https://acento.com.do/2016/sociales/8391590-infotep-fundacion-rica-entregan-premio-nacional-la-excelencia-2016/>.
252. Barrick Pueblo Viejo, Inician proyecto de emprendimiento para personas con capacidades motoras especiales, Sánchez Ramírez, <https://www.barrickpuebloviejo.do/inician-proyecto-de-emprendimiento-para-personas-con-capacidades-motoras/2017-10-20/184050.html>.
253. Severino, Jairon, 2016: Minería aporta RD\$226,023 millones a economía dominicana desde 2010 Su ponderación promedio en el PIB se mantiene en 1.73%, Santo Domingo, <https://www.eldinero.com.do/31719/la-mineria-ha-agregado-rd226023-millones-a-economia-dominicana-desde-2010/>. Conversión a dólares según la tasa de cambio del Banco Central de junio 2016
254. Según censo del 2010. Consultado en: Oficina Nacional de Estadística, 2008: Monseñor Nouel en Cifras Perfil Sociodemográfico Provincial, [https://www.one.gob.do/Content/pdf\\_perfiles/Perfil\\_monseñor\\_nouel.pdf](https://www.one.gob.do/Content/pdf_perfiles/Perfil_monseñor_nouel.pdf).
255. Equivalentes a RD\$335'475.957 a la tasa vigente del Banco Central de la República Dominicana al cierre de diciembre de 2017.
256. Oficina Nacional de Estadística, 2008, cit. arr.
257. Corresponde a RD\$ 54'024.173 según tasa Banco Central RD al 31 diciembre 2017.
258. Wikipedia, 2017: Proyecto Pueblo Viejo, [https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto\\_Pueblo\\_Viejo](https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Pueblo_Viejo).
259. Barrick Pueblo Viejo, Nuestra historia, <http://barrickpuebloviejo.do/informacion-general/nuestra-historia/2016-10-11/163729.html>.
260. La firma BGC Engineering Inc, de Canadá elaboró el Plan de Cierre para Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) 31 de Julio de 2013, Proyecto No: 0011-159 -. Consultado en: BGC Engineering Inc, 2013: Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo: Mejita, Cumba, Hondo, Pendiente Oeste y Desechos Peligrosos Final,, [https://www.mem.gob.do/transparencia/images/docs/documentos/Plan\\_de\\_Administraci%C3%B3n\\_Medioambiental\\_del\\_Estado\\_1era\\_y\\_2da\\_Enmienda/Plan-del-Estado-Original.pdf](https://www.mem.gob.do/transparencia/images/docs/documentos/Plan_de_Administraci%C3%B3n_Medioambiental_del_Estado_1era_y_2da_Enmienda/Plan-del-Estado-Original.pdf).
261. Diario Libre, 2007: Contaminación afecta aún entorno de mina Pueblo Nuevo sufre las secuelas de la explotación, <https://www.diariolibre.com/noticias/contaminacion-afecta-entorno-de-mina-INDL148462>
262. Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, <http://camiperd.org/category/documentos/guias-mineras/>.
263. El Día, 2013: Barrick Gold y la historia de un contrato muy complejo, Santo Domingo, <http://eldia.com.do/barrick-gold-y-la-historia-de-un-contrato-muy-complejo/>.
264. Diario Libre, 2014: Expertos se oponen a que el Senado declare Loma Miranda como Parque Nacional Afirman que la decisión sería inconstitucional, Santo Domingo, <https://www.diariolibre.com/noticias/expertos-se-oponen-a-que-el-senado-declare-loma-miranda-como-parque-nacional-ANDL636701>
265. Marcha Verde, <https://marchaverde.com/>.
266. Paula, Elexido, 2017: Marcha Verde: Patrimonio del Pueblo, <http://hoy.com.do/marcha-verde-patrimonio-del-pueblo/>.

267. Fundación Acción Verde, 2009: Declaración de La Comisión Ambiental de la UASD sobre la construcción de una Cementera, <http://www.accionverde.com/declaracion-de-la-comision-ambiental-de-la-uasd-sobre-la-construccion-de-una-cementer/>. Maimón Punto de Encuentro, Presidente de la Comisión Ambiental de la UASD habla sobre la minería en el país (Video), Maimón, <http://maimonpuntodeencuentro.blogspot.com/2015/09/presidente-de-la-comision-ambiental-de.html>
268. EFE, 2014: El padre Rogelio Cruz llama a la desobediencia civil por caso Loma Miranda, Santo Domingo, <https://www.listindiario.com/la-republica/2014/09/04/336184/el-padre-rogelio-cruz-llama-a-la-desobediencia-civil-por-caso-loma-miranda>.
269. Hoy, 2017: Marcha Verde reclama pago de RD\$3,000 millones a provincia Sánchez Ramírez, <http://hoy.com.do/marcha-verde-reclama-del-gobierno-pago-de-rd3000-millones-a-provincia-sanchez-ramirez/>.
270. Participación Ciudadana: ¿Qué es PC?, [https://pciudadana.org/?page\\_id=4893](https://pciudadana.org/?page_id=4893).
271. Ver Grupo BID-sociedad civil Estrategia de Relacionamiento, 2018
272. Ley 134 de 1994, por medio de la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
273. Publique lo que pagan, 2018: Objetivos, encontrado en: <http://www.publishwhatyoupay.org/es/quienes-somos/objetivos/>.
274. En la República Dominicana, Planes de Desarrollo Municipales (2.7.3.1., p. 137), Conformación de Agencia de Desarrollo en Chile (2.1.3.3., p.29), Mesa de Diálogo de Huari, Perú (2.6.3.3., p. 120).
275. Devonshire Initiative, 2017: About us, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/about-us/>.
276. Devonshire Initiative, s/a: Partnering and Partnerships: lessons learned in the DI, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/wp-content/uploads/DI-Partnership-Lessons-Learned-FINAL-.pdf>.
277. Es una plataforma de intercambio y comunidades de aprendizajes sobre el tema de conservación de la biodiversidad, apoyada por GEF, Convención sobre Diversidad Biológica, UN Environment y PNUD, ver: NBSAP Forum, 2018: Welcome to the NBSAP Forum, encontrado en: <http://nbsapforum.net/>.
278. Goxi es una comunidad virtual sobre gobernanza en industrias extractivas, apoyada por el Banco Mundial y PNUD, ver: GOXI, 2018: Guidelines for how to use GOXI, encontrado en: [www.goxi.org](http://www.goxi.org).
279. GOXI, 2018: GOXI learning series, encontrado en: <http://goxi.org/page/goxi-learning-series>.
280. Entrevista Ricardo Morel Ex Vicepresidente de Antamina y ex gerente de relaciones comunitarias de Yanacocha y Angloamerican.
281. Intervención de Raúl Benavides Vicepresidente de Negocios de Buenaventura en reunión del Grupo de Diálogo Directo Noviembre del 2016











